



Boletín 243 del WRM
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Marzo / Abril 2019

**Deforestación encubierta:
Nuevas tendencias y resistencias**



Río Amazonas, Santarem, Brasil.

Nuestra Opinión: Discursos “verdes” y deforestación.....	2
Indonesia: el destino de las aldeas pesqueras en la crisis climática y el fracaso del ‘Carbono Azul’....	4
Mozambique: la amenaza de la ‘compensación’ por pérdida de biodiversidad.....	8
Territorios indígenas en Sarawak - estado de Malasia en la isla de Borneo - amenazados por monocultivos.....	12
Financiamiento engañoso: el apoyo del Fondo Verde para el Clima a REDD+.....	16
Intento de recolonizar los bosques de la India . El nuevo proyecto de enmiendas a la Ley sobre bosques.....	21
Ecuador: relatos del despojo y deforestación provocadas por la extracción de palma y madera.....	26
WWF en el Parque Nacional Salonga de la República Democrática del Congo : tortura, asesinato y violación en grupo.....	30

ALERTAS DE ACCIÓN

Organizaciones finlandesas y uruguayas contra nueva fábrica de celulosa de la empresa UPM.....	31
Sarawak: ¡Salvemos la selva tropical de Mulu de las plantaciones de palma aceitera!.....	31

RECOMENDADOS

Amazonia Brasileña. La pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra.....	33
Plantando Conflictos: monocultivos y despojo en la Amazonía peruana.....	33
Voces de mujeres frente al extractivismo.....	34
Papua: cooptación de tradiciones indígenas para monocultivos de palma aceitera.....	34
Tratados de Libre Comercio: instrumentos que sojuzgan los derechos.....	34

Este Boletín cuenta con artículos escritos por: Susan Herawati de la Coalición Popular para la Justicia en la Pesca en Indonesia (KIARA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan); la Asociación Académica para el desarrollo de comunidades rurales en Mozambique (ADECRU - Acção Académica para o desenvolvimento das comunidades rurais); Justicia Medioambiental en Mozambique (JÁ! - Justiça Ambiental!); Amigos de la Tierra Malaysia (SAM - Sahabat Alam); Soumitra Ghosh del Foro de toda la India de movimientos de los bosques en India (AIFFM - All India Forum of Forest Movements); el colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y miembros del secretariado internacional del WRM.

Deforestación encubierta: Nuevas tendencias y resistencias

Nuestra Opinión: Discursos “verdes” y deforestación



Misiones, Argentina.

Mientras que, por un lado, en todo el mundo, las comunidades que dependen de los bosques siguen sufriendo aún mayores amenazas y la destrucción de sus territorios, por otro lado se hacen y llevan a cabo más promesas, acuerdos, proyectos y programas en nombre de “enfrentar la deforestación y el cambio climático”. Empresas multinacionales, gobiernos, bancos multilaterales, organismos de las Naciones Unidas (ONU), ONG conservacionistas y sus patrocinadores financieros siguen afirmando que ellos, los mismos actores que de hecho impulsan las causas directas y subyacentes de la deforestación, pueden ser “la solución”.

Este boletín recopila siete artículos de diferentes partes del mundo que muestran cómo los procesos de deforestación suelen ocultarse bajo discursos “verdes” y vistosa propaganda. Algunos autores también nos recuerdan que las comunidades de los bosques, a pesar de ser criminalizadas y con frecuencia convenientemente culpadas por la deforestación y desalojadas de sus territorios, continúan resistiendo esta destrucción así como las

soluciones falsas que se les imponen aún cuando son quienes se encargan del cuidado de sus bosques, culturas y vidas.

Un artículo de **Indonesia** advierte que si bien los impactos devastadores de la crisis climática ya están afectando gravemente a miles de comunidades pesqueras, un mecanismo de compensación llamado “Carbono Azul”, promovido por las Naciones Unidas como una “solución” a la crisis, está transformando los territorios costeros en activos negociables. Si bien el daño a los manglares se debe al desarrollo de hoteles, granjas camaroneras industriales, la expansión de plantaciones de palma aceitera y la minería masiva, el Carbono Azul tiene como objetivo maquillar de verde la creciente y devastadora destrucción de éstos y otros actores contaminantes.

Desde **Mozambique**, un artículo describe los peligros de los crecientes fondos fiduciarios para la conservación, como el caso de BIOFUND. Este fondo fue creado para financiar el sistema de áreas protegidas de Mozambique, con el apoyo del Banco Mundial, organismos de cooperación internacional y ONGs conservacionistas. Su objetivo es captar grandes contribuciones, incluyendo los ingresos generados por proyectos de compensación de la biodiversidad del país, y especular con ese dinero en los mercados financieros.

Otro artículo muestra cómo, a pesar de las promesas del gobierno de **Malasia** en cuanto a mantener una cobertura forestal del 50 por ciento en el país, desde la década de 1990 se han destinado al menos 3,4 millones de hectáreas de zonas mayormente de bosques para el establecimiento de monocultivos, en especial plantaciones forestales para la obtención de madera y plantaciones de palma aceitera. La ambición del 50 por ciento parece basarse en estadísticas que consideran a los monocultivos como parte de la “cubierta forestal” nacional.

Otro artículo expone cómo el **Fondo Verde para el Clima**, que tiene el objetivo de ayudar a los países del Sur global a responder al cambio climático, aprobó recientemente por primera vez en la Amazonia brasileña el llamado pago REDD+ basado en “resultados”. También advierte que la Corporación Financiera Internacional, la agencia de financiamiento del Banco Mundial, se prepara para solicitar fondos para subvencionar proyectos REDD+ del sector privado, que indefectiblemente entrarán en conflicto con las comunidades que dependen de los bosques.

Desde la **India**, un artículo denuncia los nuevos intentos del gobierno, en colaboración con empresas y ONG conservacionistas, de apropiarse de los bosques y desalojar a las comunidades que dependen de ellos. Después de múltiples intentos, una reciente propuesta de enmienda de la Ley sobre los bosques de la India, de la época colonial, en los hechos vendría a poner fin a la Ley de los Derechos sobre los Bosques, una ley fundamental que reconoce numerosos derechos de los *Adivasis* (pueblos indígenas) y otras comunidades tradicionales que habitan en los bosques. Las enmiendas suponen la criminalización de todos los usos posibles de los bosques por parte de las comunidades (a menos que los funcionarios forestales lo permitan), y crean una nueva categoría jurídica llamada “bosques de producción”, que habilita la privatización a gran escala.

El caso de la comunidad Wimbí en **Ecuador** señala los perjudiciales efectos de la expansión de las plantaciones de palma aceitera, que va de la mano del tráfico de tierras y las plantaciones forestales para la obtención de madera. Además de la destrucción de los bosques y del suelo de la zona, para los miembros de las comunidades, la pérdida de sus lugares de cultivo es un elemento más de presión que los lleva a buscar trabajo asalariado

en otros lugares, incluso en la empresa palmícola que los desalojó. Pero los residentes de Wimbí no han dejado de luchar por sus tierras y sus medios de vida.

Por último, el artículo final revela la horrorosa violencia y abusos llevados a cabo por el **modelo de conservación** que busca “preservar una naturaleza sin gente”. Informes de las organizaciones *Rainforest Foundation UK* y *Buzzfeed News* han revelado la crueldad perpetuada para con los pueblos indígenas que viven dentro y alrededor de las áreas protegidas apoyadas por el **WWF**. Este es definitivamente un grave problema de violación de los derechos humanos así como de intervención colonial en bosques tropicales. Demasiado a menudo las organizaciones conservacionistas están en el centro de estos graves abusos.

Indonesia: el destino de las aldeas pesqueras en la crisis climática y el fracaso del ‘Carbono Azul’

Sugeng Haryanto, un pescador de 57 años de la costa de Jepara, en Java Central, empuja su bote hacia el muelle todas las semanas. Durante el último mes, Sugeng no ha podido salir a pescar. Las fuertes olas y vientos fueron la razón principal de que Sugeng mantuviera su barco y su equipo de pesca amarrados en el puerto. No quería arriesgarse a perder la vida, como le pasó a algunos de sus amigos.



Actualmente, las comunidades pesqueras en Indonesia enfrentan problemas vinculados directamente al clima que resultan difíciles de entender. **Desde la reducción del período de pesca hasta desastres naturales que suceden cada año en mayor número en los territorios costeros de Indonesia.** Esos territorios abarcan bosques de mangles, praderas de hierbas marinas y marismas (un tipo de humedal) de agua salada. Debido a todas estas dificultades, los pescadores en Indonesia solo pueden salir al mar 150 días al año. Esto significa que los otros 215 días deben abstenerse de cualquier actividad pesquera.

Las comunidades pesqueras indonesias sufren directamente los daños efectos de la crisis climática. A lo largo de los últimos cinco años, al menos 737 aldeas costeras sufrieron deslizamientos de tierra, 2.651 quedaron inundadas, 307 se vieron afectadas por inundaciones repentinas, 1.484 confrontaron maremotos, mientras que 1.422 sufrieron los efectos de tornados. Asimismo, otras 790 aldeas costeras fueron golpeadas por terremotos, 6 por un tsunami y otras 54 se vieron afectadas por una erupción volcánica. (1)

Cada año, el destino de millones de pescadores se pone sobre la mesa de negociaciones sobre el clima de la ONU. Lamentablemente, estas negociaciones han perdido el rumbo ya que no abordan los problemas verdaderos y subyacentes de esta crisis.

Pero no se trata solamente de que hoy en día los barcos de pesca quedan anclados por períodos cada vez más largos, sino de que **el futuro de los pescadores para mantener sus medios de subsistencia y el control sobre sus territorios está ligado a la amenaza de esta crisis multidimensional y a las llamadas soluciones que la acompañan.**

Cuando el carbono se vuelve azul

Una de las reacciones de la ONU a esta crisis multidimensional es una iniciativa denominada **Carbono Azul**. También conocida como **REDD Azul**, fue introducida por el PNUMA y otros organismos de la ONU en 2009. A lo largo de numerosas reuniones internacionales, el PNUMA reafirmó la importancia de introducir **un nuevo mecanismo de compensación de carbono por el cual las emisiones de carbono puedan ser compensadas por la absorción de carbono que realizan los ecosistemas costeros**. Según sus defensores, los territorios costeros ricos en plantas, tales como los manglares, las praderas de hierbas marinas y las marismas de agua salada (un tipo de humedal), absorben y almacenan grandes cantidades de dióxido de carbono. (2)

Una publicación de 2009 de varios organismos de la ONU titulada “Carbono Azul: el rol de los océanos saludables en fijar el carbono” (*Blue Carbon: the Role of Healthy Oceans in Binding Carbon*) afirma que la protección, el manejo y la restauración de los ecosistemas marinos aumentarán su capacidad de absorción de carbono a casi el 10 por ciento de la reducción de emisiones globales requerida. (3)

La investigación sobre la iniciativa Carbono Azul realizada por la Agencia de Investigación y Desarrollo Marítimo y Pesquero de Indonesia (Balitbang KP) afirma que los lechos de las praderas marinas tienen el potencial de absorber alrededor de 4,88 toneladas de carbono por hectárea por año. En total, las praderas de hierbas marinas en Indonesia podrían almacenar 16,11 millones de toneladas de carbono por año. Y, en total, los manglares de Indonesia podrían almacenar 122,22 millones de toneladas de carbono por año.

Hasta la fecha, la iniciativa Carbono Azul es promovida sistemáticamente en las reuniones internacionales, así como en las cumbres anuales de la ONU sobre el clima. Durante la Conferencia Nuestro Océano, celebrada en Bali en 2018, **el gobierno de Indonesia alentó los proyectos de conservación marina y el Carbono Azul, con el objetivo de incluir en dichos mecanismos 20 millones de hectáreas para 2020**. En 2018, la zona establecida para la conservación marina alcanzó 19,14 millones de hectáreas.

La organización indonesia KIARA (Coalición Popular para la Justicia en la Pesca) destaca que **hasta el momento, la conservación marina no se ha implementado como una actividad democrática, que se origine a partir del conocimiento y la sabiduría de las comunidades marítimas de Indonesia, sino como una actividad verticalista, impuesta por el estado**. Como resultado, la gente de las comunidades costeras se convierte en víctima de lo que, desde su perspectiva, equivale a proyectos ecofascistas.

¿Intercambio de carbono? Plantando árboles de mangle

El fondo *Livelihoods Fund*, que cuenta con el apoyo de empresas privadas, invierte desde 2011 en proyectos de compensación alrededor del mundo, vinculados a las cadenas de suministro de sus inversores. Tres de estos proyectos se encuentran en territorios de manglares: uno en Indonesia, uno en India y otro en Senegal. En su página web, ***Livelihoods Fund* dice que actualmente se han plantado 18 millones de árboles en Indonesia, 16 millones en la India y 79 millones en Senegal**. (4)

Los proyectos tienen una duración de 20 años y **los inversionistas (empresas privadas) recibirán créditos de carbono a partir de los árboles de mangle plantados por las comunidades costeras**. En base a esto, **estas industrias pueden continuar sus negocios de la manera habitual** (y seguir con las mismas emisiones) al tiempo que afirman haber reducido sus emisiones de carbono.

Los inversionistas de *Livelihoods Fund* son: la empresa del agronegocio Danone; la multinacional francesa *Schneider Electric*; el grupo bancario francés *Credit Agricole*; el fabricante francés de artículos de lujo *Hermès International*; el grupo de viajes francés *Voyageurs du Monde*; la empresa francesa de servicios postales *La Poste Group*; la compañía fabricante de neumáticos Michelin; la compañía de fragancias y sabores Firmenich; la entidad financiera pública francesa *Caisse des dépôts et consignations* y la empresa alemana de software y tecnología SAP.

Repitiendo los fracasos de REDD+

La iniciativa Carbono Azul se inventó como una versión del mecanismo REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal) para territorios costeros y de manglares. Durante casi 15 años se ha promovido REDD+ como una solución a la deforestación en los bosques tropicales. Pero la deforestación continúa. Lamentablemente, REDD+ es un mecanismo orientado a los negocios, que es la causa de una serie de problemas. Como en otros lugares, **los proyectos REDD+ en Indonesia han causado varios conflictos.**

Un ejemplo de ello es un proyecto REDD+ en la aldea Henda, en Borneo, Indonesia, organizado por el PNUD y financiado por el gobierno noruego. Una investigación reveló que este proyecto ha causado conflictos a la interna de la comunidad como consecuencia de la falta de transparencia y el manejo discriminatorio de los fondos de REDD+ en el ámbito de la aldea. Una de las razones del conflicto tuvo su origen en el programa de empoderamiento vinculado al proyecto REDD+, que no involucraba a todas las comunidades, lo que inevitablemente generó recelos entre los aldeanos. (4)

Otro proyecto REDD+ en la aldea de Mantangai Hulu causó además conflictos con los donantes y el gobierno. Este proyecto REDD+ fue organizado por la Asociación de Bosques y Clima de Kalimantan (KFCP) y fue financiado por el gobierno australiano. La comunidad de la aldea de Mantangai Hulu cedió sus 120.000 hectáreas de bosque a KFCP para un proyecto piloto REDD+. **Cuando se hizo evidente que el proyecto era más beneficioso para los facilitadores locales, el gobierno y los donantes, la comunidad organizó la resistencia al proyecto.** La distribución de los fondos de REDD+ tampoco fue transparente y no dio participación a la comunidad. (5)

El fracaso de REDD+ en detener la deforestación y su rol en causar numerosos conflictos con las comunidades y a la interna de ellas, debería servir de lección a los líderes mundiales, quienes deberían tener más cuidado en las respuestas que dan a la crisis climática. Al mismo tiempo, las comunidades marítimas de Indonesia reclaman la adopción de medidas para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, **las políticas propuestas tienden a ser meros parches, ofreciendo soluciones falsas con objetivos de reducción de emisiones que son insuficientes y dependientes de mecanismos de compensación.**

Las negociaciones y las posibles soluciones para enfrentar la crisis climática deben poner su mirada en el conocimiento y las necesidades de las comunidades. **No más falsas soluciones como el Carbono Azul o similares, que de hecho aumentan la carga de las finanzas del Estado, incrementando la deuda externa.** La deuda también abre las puertas a una mayor corrupción. Estos mecanismos de compensación, propuestos por el Banco Mundial, siempre se basaron en préstamos. Sin embargo, en 2018, el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia rechazó el sistema de préstamo. No obstante, y lamentablemente, el mecanismo implementado todavía se basa en la inversión extranjera y el comercio de carbono, lo que viene generando los mismos problemas que el mecanismo propuesto por el Banco Mundial.

La mercantilización de una crisis

KIARA considera que **la iniciativa Blue Carbon es un pretexto para convertir los territorios costeros y marinos en activos negociables.** Hay al menos tres razones por las que la Iniciativa Carbono Azul no es la solución a la crisis climática.

En primer lugar, los proyectos de Carbono Azul contabilizan el carbono almacenado de tal manera que **se beneficia solo a algunas personas o a un grupo en particular, pero excluye a muchos en la comunidad que se ven perjudicados por los proyectos Carbono Azul, porque ya no pueden usar los manglares o las praderas marinas como lo hacían antes.** Mientras tanto, se ignora la existencia y el papel que juegan las comunidades costeras en el mantenimiento de los ecosistemas costeros, con el uso que hacen de los manglares para la obtención de hierbas medicinales, ingredientes cosméticos y como fuente de alimentos.

En segundo lugar, se argumenta que una de las causas de la crisis climática es la destrucción de los manglares por su mal manejo. **En Indonesia, el daño a los manglares y los ecosistemas costeros se debe a modelos de emprendimientos extractivos y de explotación tales como la ocupación de zonas costeras con hoteles, apartamentos o zonas de recreación, granjas industriales camaroneras, la expansión de plantaciones de palma aceitera en la costa y la minería costera masiva.** El Centro de Datos e Información de KIARA señala que en Indonesia, en 2018, se ocuparon como mínimo 42 zonas costeras para tales fines.

En tercer lugar, el Carbono Azul **no puede cambiar la forma de actuar de las empresas responsables de grandes cantidades de emisiones de carbono,** ya que se trata simplemente de un mecanismo de compensación de las emisiones de carbono.

Los territorios costeros tienen características únicas y son muy vulnerables. Las costas son un zona de transición entre la tierra y el mar. La presión, tanto natural como humana, es muy evidente. **La iniciativa Carbono Azul les da la oportunidad a las élites de empeñar los bienes naturales y enriquecerse en nombre del cambio climático.**

Mientras tanto, debido a su vulnerabilidad, tanto los territorios como las comunidades de las zonas costeras seguirán viéndose perjudicados por los emprendimientos realizados en esas áreas, por el agravamiento de los efectos del cambio climático y por las falsas soluciones promovidas en las negociaciones de la ONU sobre el clima.

En la próxima década habrá que adoptar decisiones cruciales que influirán en la forma en que las comunidades de pescadores de Indonesia se verán afectadas por la multidimensional crisis climática. En lugar de glorificar el pasado del archipiélago sería prudente que el gobierno se centrara primero en reducir los efectos de la crisis climática en los pescadores artesanales y, al mismo tiempo, **salvar al mundo costero y marítimo indonesio de quedar atrapado en el comercio de carbono.**

¡No vendan nuestro mar en nombre del comercio de carbono!

¡Nuestro Mar, Nuestra Identidad, Somos el Mar!

Susan Herawati

Secretaria General de la Coalición Popular para la Justicia en la Pesca (KIARA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan)

(1) Centro indonesio de información y datos, 2019

(2) Por más información sobre el Carbono Azul, ver WRM “Carbono Azul’ y ‘REDD Azul’: transformando los territorios marino-costeros en mercadería”, 2014, <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion2/carbono-azul-y-redd-azul-transformando-los-territorios-marinocosteros-en-mercaderia-2/>

(3) Pueden acceder a la publicación (en inglés) en <http://www.grida.no/publications/145>

(4) Ver su página web en <http://www.livelihoods.eu/portfolio/>

(5) Anggraeni, Nur. (2013). *Melestarikan Tradisi, Meningkatkan Kesejahteraan: Pandangan Tentang Dampak Program REDD+ di Kalimantan Tengah*. Master Thesis UGM

(6) Firnaherera, Vice Admira. (2013). *Konflik Pengelolaan REDD+: Studi Kasus di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah*. Master Thesis UGM y

Hidayah, Nur Putri. (2013). *Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Kalumpang Kedamangan mantangai dalam Mendukung Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+)*. Master Thesis UGM.

Mozambique: la amenaza de la ‘compensación’ por pérdida de biodiversidad



Los análisis sobre el reciente paso del ciclón Idai por Mozambique indican una fuerte relación entre el devastador ciclón y los eventos climáticos extremos. Es una alerta terrible de que se necesita resolver urgentemente el problema del calentamiento global. Lamentablemente, no es eso lo que se espera que ocurra. **Los gobiernos de los países más industrializados, presionados por sus multinacionales e instituciones financieras**

como el Banco Mundial, promueven los llamados mecanismos de ‘compensación’ en respuesta a la continua destrucción y contaminación ambiental.

Uno de los mecanismos de ‘compensación’ más conocidos es REDD, sigla en inglés para la Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación forestal. (1) Este mecanismo permite que las industrias contaminantes, en lugar de reducir las emisiones de dióxido de carbono derivadas de la combustión de petróleo, gas y carbón mineral en sus propios países, principal causa del calentamiento global, hagan una ‘compensación’ en otro lugar, por ejemplo, en Mozambique.

El gobierno de Mozambique apuesta por el mecanismo REDD. **Al adoptar una definición de bosque que acepta cualquier área con árboles, el gobierno incluye las plantaciones de monocultivos de árboles en su estrategia de REDD.** Esto se ve cuando, por ejemplo, el gobierno afirma en su “Agenda Forestal 2035”, publicada a principios de 2019, que pretende plantar un millón de hectáreas de árboles para el 2035. (2) Además, el gobierno busca atraer financiamiento externo para REDD en áreas con bosques. Recientemente, el gobierno firmó un acuerdo por US\$50 millones de dólares con el Banco Mundial con el objetivo de reducir la deforestación y con eso las emisiones de dióxido de carbono de los bosques. (3)

La compensación por pérdida de biodiversidad

Otro mecanismo de ‘compensación’ menos conocido pero que ha sido propuesto para Mozambique es la ‘compensación’ por pérdida de biodiversidad. Sus defensores afirman que en el caso de empresas que destruyen la biodiversidad, como una mina a cielo abierto por una empresa minera, un proyecto de ‘compensación’ por pérdida de biodiversidad en otro lugar podría ‘compensar’ esa destrucción, manteniendo o mejorando la biodiversidad en ese otro lugar. El mecanismo, según afirman sus defensores, podría garantizar que no haya ninguna pérdida ‘neta’ de biodiversidad.

La forma de aplicar este mecanismo más utilizada ha sido mediante proyectos individuales. Por ejemplo, la empresa minera británico-australiana Rio Tinto está extrayendo ilmenita en Madagascar para exportar a Canadá. Para compensar la destrucción de la biodiversidad causada en la mina, la empresa instaló un proyecto de ‘compensación’ por pérdida de biodiversidad en otro bosque con características parecidas, 50 kilómetros al norte del local de extracción. La empresa afirma que ese bosque estaría amenazado y que su proyecto de ‘compensación’, en colaboración con la ONG Birdlife Internacional, podría salvarlo. Un proyecto de plantación de árboles incluso ‘aumentaría’ la biodiversidad. (4)

La estrategia prevista para Mozambique sin embargo parece enfocarse en otra forma de ‘compensación’ por pérdida de biodiversidad. Un documento de 2016 conocido como “Guía para la compensación de biodiversidad en Mozambique”, elaborado por consultores del Banco Mundial en colaboración con el fondo BIOFUND de Mozambique, propone un sistema nacional que implemente la “compensación por pérdida de biodiversidad”, “minimizando los daños ambientales resultantes del desarrollo económico rápido”. La propuesta pretende **mitigar “los impactos adversos de los proyectos de desarrollo a gran escala”, siendo que las empresas, causantes de la destrucción, contribuirían con el mantenimiento e incluso la expansión del sistema mozambiqueño de áreas protegidas.** Además afirman que los proyectos individuales, como el ejemplo ya citado de la empresa Rio Tinto en Madagascar, también formarían parte de la propuesta. El sistema mozambiqueño de áreas

protegidas cubre el 26% del territorio nacional pero recibe apenas el 9% de los recursos que se necesitarían para su mantenimiento.

¿Qué es el BIOFUND?

El BIOFUND, creado en 2011, es un '*conservation trust fund*', es decir, un fondo fiduciario para la conservación. Este tipo de fondo ya existe en más de 80 países y ha "movilizado cerca de 800 millones de dólares estadounidenses para la conservación", provenientes de gobiernos e instituciones financieras interesadas en financiar áreas protegidas a través de dichos fondos. A pesar que este fondo afirma que no sustituiría las responsabilidades del Estado, **el BIOFUND es una asociación público-privada que se creó para asumir el papel de financiar el sistema de áreas protegidas de Mozambique con apoyo del Banco Mundial, agencias bilaterales de cooperación internacional y ONG conservacionistas.** El informe antes mencionado de los consultores del Banco Mundial se jacta de que el BIOFUND es un organismo "independiente, privado y sin fines de lucro" que está "en una buena posición para recibir, administrar y desembolsar fondos para compensación a lo largo del tiempo". (5)

El principal problema que el BIOFUND señala para financiar la conservación en Mozambique es la dependencia de recursos externos. En 2014 el 81% de la conservación se financiaba con fuentes externas. La solución dada por el BIOFUND fue la de crear **un fondo que capte contribuciones relativamente grandes y especular con ese dinero en los mercados financieros para aumentar el volumen del fondo. Las utilidades generadas se invertirían en la conservación ambiental.**

Aparentemente, **el mecanismo de 'compensación' por pérdida de biodiversidad aparece como otra posible fuente de captación de recursos**, siempre y cuando hayan proyectos destructores de biodiversidad que hayan sido propuestos e implantados en el territorio mozambiqueño. De hecho, Mozambique vive una fase de crecimiento económico por encima del promedio mundial que se basa en proyectos e industrias que causan una gran destrucción de biodiversidad, como por ejemplo la minería, la extracción de gas y petróleo y las centrales hidroeléctricas.

El papel del Banco Mundial

El Banco Mundial ha tenido un papel clave en la propagación de mecanismos de 'compensación', tales como REDD y la 'compensación' por la pérdida de biodiversidad. En 2012, la Corporación Internacional Financiera, el órgano del Banco que financia empresas privadas, incluyó en sus criterios la opción de que las empresas puedan destruir áreas críticas en términos de biodiversidad con la condición de presentar un plan donde se explique cómo pretenden 'compensar' aquella destrucción.

En 2015 el Banco produjo un informe parecido al que hizo en Mozambique, señalando el camino para Liberia sobre cómo poder utilizar el dinero del sector de la minería, que tiene una fuerte presencia en el país, para financiar "áreas protegidas". (6) A eso le llaman una "oportunidad" para el sector de la conservación. Lo que no se menciona es que donde esas empresas se instalen, se destruirán áreas ricas en biodiversidad. Tampoco mencionan que con la minería también se destruirán los medios de subsistencia de comunidades locales, como ocurre con la mina de la empresa brasileña Vale en la provincia de Tete, Mozambique.

Tampoco se habla de que con los proyectos de “compensación” una cantidad aún mayor de comunidades confrontarán diversas problemáticas.

¿Cuáles son las amenazas de la ‘compensación’ por pérdida de biodiversidad?

La primera amenaza es la lógica del mecanismo en sí, que depende de la destrucción para prometer recursos de ‘compensación’ en otros lugares, creando así la necesidad de una narrativa de que estos otros lugares estarían sufriendo alguna amenaza. Los consultores que elaboran esta narrativa generalmente culpan a las comunidades de ser la principal amenaza. Esta es una visión simplista de la realidad y perversa para las comunidades que dependen de los bosques. Significa que **mientras más destrucción haya, con todas las ya bien conocidas consecuencias nefastas, más recursos recibirá el BIOFUND**. El mecanismo termina creando un incentivo para que la destrucción ambiental en Mozambique continúe y se agrave. Cabe preguntarse, ¿cómo un fondo ‘de conservación’ como el BIOFUND pretende alimentarse de la destrucción de la biodiversidad que éste pretende conservar? ¿No debería, en primer lugar, ayudar a que la destrucción se detenga?

Además de esto, hay que recalcar que **no es posible ‘compensar’ la biodiversidad de un lugar en otro lugar**, ya que cada área y cada lugar, cada sitio, tiene una biodiversidad específica y única, una importancia particular para con las comunidades, que precisa ser valorada y conservada. La biodiversidad de un lugar no puede ser sometida a una visión simplista, de meros cálculos económicos y ecuaciones incomprensibles para alegar una ‘compensación’ o pérdidas ‘netas’.

Otra amenaza del mecanismo está referida tanto a las comunidades como a las áreas y bosques de los que éstas dependen. En el caso del proyecto de Rio Tinto en Madagascar, las comunidades que viven en el área de ‘compensación’ fueron sometidas a severas restricciones. Se las señaló como amenaza para la conservación de la biodiversidad en aquel lugar, a pesar de que viven allí por generaciones salvaguardando el bosque. **Cuando, en el caso de Mozambique, el Banco Mundial afirma que los recursos de las empresas destructivas también podrían utilizarse para aumentar las áreas protegidas, significa que las comunidades que viven en esas áreas corren serios riesgos de expulsión**. Se generarían más situaciones de conflicto y de injusticia ambiental en el país y se duplicarían las usurpaciones de tierras: en las áreas de destrucción y en las de ‘compensación’.

Es importante destacar que grandes corporaciones apoyan la creación de mecanismos como la ‘compensación’ por pérdida de biodiversidad, ya que representan un camino por el cual pueden seguir destruyendo y lucrando durante más tiempo. **A pesar de las promesas en los documentos del Banco Mundial de que este mecanismo, a través del BIOFUND, podría beneficiar a las comunidades, la tendencia es que éstas se verán mucho más perjudicadas al perder tierras y bosques de los que dependen**. Combatir la deforestación y conservar la biodiversidad es ciertamente necesario y urgente. Pero no puede hacerse en base a establecer la destrucción como “oportunidad” para poder llevar a cabo la conservación. Es oportunismo puro, que perpetúa las profundas injusticias sociales y ambientales de un modelo económico devastador que se profundiza cada vez más en el país.

ADECRU (Acção Académica para o desenvolvimento das comunidades rurais, Moçambique), JÁ! (Justiça Ambiental, Moçambique) y el WRM

(1) Las industrias pueden comprar certificados de contaminación, los llamados créditos de carbono, que les dan derecho a contaminar. A través del mecanismo REDD, se le paga a un país con bosques tropicales para que éste conserve un bosque que estaría amenazado o establezca una plantación de árboles, que absorba y por lo tanto almacene, carbono de la atmósfera. Con eso se 'compensaría' la continua contaminación industrial. Pero se trata de una falsa solución. Los bosques o las plantaciones son almacenes temporales de carbono, en tanto las industrias que compran el derecho a contaminar echan continuamente más dióxido de carbono a la atmósfera. Con eso y con el paso del tiempo, REDD agrava el calentamiento global. Además, los proyectos REDD y los de plantaciones de árboles, como pinos o eucaliptos, ocasionan muchos otros problemas a las comunidades locales, que pierden el acceso a los bosques y tierras fértiles. Para colmo, generalmente se las señala como principales responsables de la deforestación y la degradación ambiental.

(2) Agenda Florestal 2035 e Programa Nacional de Florestas. Mitader, Febrero 2019, Documento para divulgación y consulta pública.

http://www.dinaf.gov.mz/pirf_mreddplus/attachments/article/183/DOC_AGENDA%202035%20e%20Programa%20nacional%20de%20florestas.pdf

(3) El Banco Mundial, Mozambique and Democratic Republic of Congo sign landmark deals with World Bank to cut carbon emissions and reduce deforestation, Febrero 2019.

<http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/02/12/mozambique-and-democratic-republic-of-congo-sign-landmark-deals-with-world-bank-to-cut-carbon-emissions-and-reduce-deforestation>

(4) Boletín 223 del WRM, Proyecto de Río Tinto de compensación por pérdida de biodiversidad en Madagascar: la cultura y la religión utilizadas para imponer restricciones, 2016,

<https://wrn.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion2/proyecto-de-rio-tinto-de-compensacion-por-perdida-de-biodiversidad-en-madagascar-la-cultura-y-la-religion-utilizadas-para-imponer-restricciones/>

(5) BioFund, <http://www.biofund.org.mz/>

(6) Boletín 213 del WRM, El Banco Mundial prepara el camino para una estrategia nacional en compensación de biodiversidad en Liberia, 2015, <https://wrn.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/el-banco-mundial-prepara-el-camino-para-una-estrategia-nacional-en-compensacion-de-biodiversidad-en-liberia/>

Territorios indígenas en Sarawak - estado de Malasia en la isla de Borneo - amenazados por monocultivos



Indigenous communities blockade. Ph: Save the Mulu Rainforest

A pesar de su proximidad al Parque Nacional Gunung Mulu, zona de Patrimonio Mundial de la UNESCO, la comunidad indígena Penan de Kampung Batu Bungan, en el estado de Mulu, en Sarawak, informó en enero de 2019 que **su territorio ancestral ha sido invadido por la construcción de un camino para desarrollar una plantación de palma aceitera**. La comunidad instaló un bloqueo contra las obras de Radiant Lagoon, una empresa de aceite de palma de Malasia, y presentó un informe policial en Marudi para detener la

invasión. Según se informa, los trabajadores que estaban construyendo la carretera simplemente desmantelaron el bloqueo.

Además del camino, la compañía ya está preparando plántulas de palma aceitera. En marzo de 2019, aldeanos de Penan y Berawan, en la región de Mulu, encontraron en el vivero de plántulas de palma aceitera de Radiant Lagoon **docenas de kilos de Antracol, un plaguicida cuyo uso ha sido prohibido por la Unión Europea por sus posibles efectos en mujeres embarazadas, pues podría causar daño al feto.** (1)

Promesas del gobierno versus acciones del gobierno

En septiembre de 2018, el Ministro federal de Industrias de Plantaciones anunció que el nuevo gobierno no permitiría que se siguieran expandiendo las plantaciones de palma aceitera en el país. Este anuncio se dio en el marco de sus esfuerzos por garantizar que Malasia mantenga una cobertura forestal del 50 por ciento. En diciembre, Sarawak también anunció que adoptaría este compromiso. Sin embargo, persisten muchas dudas sobre lo que realmente significa esta promesa.

Entre fines de la década de 1990 y mediados de la década de 2000, el Departamento de Bosques de Sarawak ha concedido un total de 43 licencias para la plantación de árboles maderables, abarcando una superficie de 2,8 millones de hectáreas bajo su sistema de Licencia para Bosques Plantados (LPF, por su sigla en inglés).

Estas licencias LPF se conceden tanto para los bosques de producción que son zona de reserva como para los bosques de tierras estatales que no son zona de reserva. Los bosques de producción que son zona de reserva son bosques que por ley han sido destinados a la producción de madera “de forma sostenible” a perpetuidad y quedan bajo la autoridad del Departamento de Bosques. Los bosques de tierras estatales que no son zona de reserva son los bosques restantes que no reciben esa “protección” y pueden convertirse legalmente a otras actividades de uso de la tierra y todavía están parcialmente bajo la autoridad del Departamento de Tierras y Mapeo. Por lo tanto, la tala en un bosque de producción sigue pautas y planes de manejo más estrictos, en comparación con los bosques estatales que no son zona de reserva.

Algunas de las licencias LPF permiten a las empresas utilizar no más del 20 por ciento de la superficie que tienen en concesión para el cultivo de palma aceitera. **Las áreas que pueden ser plantadas se estiman en 1,3 millones de hectáreas para árboles maderables y 285.520 hectáreas para palma aceitera.** En diciembre de 2013 se habían plantado 325.314 y 146.578 hectáreas con árboles maderables y palma aceitera, respectivamente. (2) A pesar de la falta de cifras oficiales más recientes, la organización *Sahabat Alam Malaysia*, SAM (Amigos de la Tierra Malasia) estima que **en Sarawak ya se ha entregado la mayoría de las licencias disponibles. Sin embargo, no todas se han llevado a cabo, ya que se trata de grandes superficies dadas en concesión.**

Además, desde fines de la década de 1990, el Departamento de Tierras y Mapeo de Sarawak también ha concedido permisos de plantación en tierras que no están bajo la autoridad del Departamento de Bosques. Dichas tierras a su vez pueden quedar bajo la autoridad de otros organismos, tales como la Autoridad de Custodia y Desarrollo de Tierras (LCDA) y la Junta de Desarrollo de Tierras de Sarawak (SLDB). Estas pueden ser explotadas por el sector privado o el público, o mediante algún tipo de asociación público-

privada, con o sin la participación de las comunidades nativas. A partir de los datos de las páginas web de varios organismos estatales y federales, SAM (Amigos de la Tierra Malasia) ha estimado que hoy en día la tierra destinada a plantaciones fuera del sistema LPF puede llegar a unas 800.000 hectáreas. (3) Sin embargo, no se dispone de datos completos sobre el tamaño total de las licencias que se han concedido realmente, y en qué medida involucran el cultivo de palma aceitera. Mientras tanto, la Junta de Aceite de Palma de Malasia (MPOB) muestra que en 2017, la superficie del cultivo de palma aceitera en Sarawak alcanzó las 1,5 millones de hectáreas. (4)

Es importante señalar que **las plantaciones de palma aceitera no son la única causa de conflictos y destrucción de bosques en Malasia. Las plantaciones industriales de árboles para la extracción de madera y las represas hidroeléctricas son otras dos causas** de conflictos y deforestación. En los hechos, los monocultivos forestales para la extracción de madera y de árboles de palma aceitera están permitidos en los bosques de producción que son zona de reserva. En Sarawak, ese tipo de conversión de tierras boscosas también tiene lugar en bosques estatales que no son zona de reserva.

Es así que desde fines de la década de 1990, **en Sarawak se autorizaron más de 3 millones de hectáreas para el establecimiento de monocultivos** (considerando las licencias LPF, las emitidas por el Departamento de Tierras y Mapeo y la agencia federal para las estadísticas del desarrollo de palma aceitera), en donde **la superficie total destinada a las plantaciones de árboles maderables es mayor que la destinada a palma aceitera. Esto es una cuarta parte de la tierra total de Sarawak.** Además, la investigación de SAM ha demostrado que **la misma tendencia se da también en Malasia Peninsular y Sabah.** (5) En 2017, en Malasia peninsular se destinaron 399.861 hectáreas de sus bosques de producción para el establecimiento de plantaciones de árboles maderables. (6) En el mismo año, en Sabah se destinaron 451.239 hectáreas de sus bosques de producción que son zona de reserva para plantaciones forestales y otras 77.134 hectáreas para el cultivo de palma aceitera. (7) En total, en Malasia, la superficie seleccionada para el establecimiento de nuevas plantaciones de monocultivos que incluyen conversiones de bosques es de al menos 3,7 millones de hectáreas, más grande que el tamaño del estado de Pahang. **Muchas de estas zonas también se encuentran dentro de territorios tradicionales indígenas.**

Los problemas centrales son, por lo tanto, la deforestación y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y sus derechos consuetudinarios a la tierra, como lo demuestra el caso de Batu Bungan. La palma aceitera es solo una de las mercancías (*commodities*) de preferencia.

Por lo tanto, la ambición del nuevo gobierno federal de mantener una cobertura forestal nacional del 50 por ciento parece apoyarse en **estadísticas que incluyen en la “cobertura forestal” a las plantaciones de monocultivos, junto con fragmentos de bosques adyacentes.** Esto sería coherente con la engañosa definición de bosques que hace la FAO.

Según la comunidad de Kampung Batu Bungan, ya ha habido una destrucción considerable del bosque, el río y otros recursos como resultado de la construcción de caminos. La comunidad había oído hablar por primera vez de la plantación de palma aceitera en 2018, pero nunca aceptó el proyecto. La ausencia de un proceso de consulta genuino también implica que las personas se queden sin información crucial. No recibieron documentos que identificaran a los proponentes del proyecto, sus agentes, el límite y el tamaño de las

operaciones del proyecto y otros detalles importantes. También se preguntan acerca de los beneficios que se derivan de los árboles talados para la construcción de caminos. **La comunidad exige que se detenga de inmediato la invasión de su territorio ancestral.**

Esta situación no es un caso aislado en Sarawak, ni siquiera en Malasia. No se trata solo de plantaciones de palma aceitera. Como lo indica el Informe de la Investigación Nacional sobre los Derechos a la Tierra de los Pueblos Indígenas, publicado en 2013 por la Comisión de Derechos Humanos de Malasia (SUHAKAM), **las violaciones de los derechos indígenas consuetudinarios a la tierra en el país son un problema sistémico y la solución a la falta de seguridad en materia de tenencia de la tierra debe ser prioritaria.**

Esto, en línea con el compromiso de los gobiernos federales y estatales de detener la deforestación, pone de relieve **la necesidad de revisar y revocar las grandes licencias de monocultivos que afectan los territorios consuetudinarios indígenas y los bosques de producción reservada, así como los bosques estatales no reservados, independientemente de la mercancía (commodity) involucrada.**

Además, el gabinete federal debe proporcionar una actualización del informe nacional de investigación de SUHAKAM. Es hora de que los gobiernos federal y estatal presten atención a las recomendaciones del informe SUHAKAM de 2013 y protejan los derechos de los pueblos indígenas del país. También es imperativo que los gobiernos federal y estatal respeten el reclamo de la comunidad Penan de Kampung Batu Bungan. También debe considerarse su proximidad al internacionalmente reconocido Parque Nacional Gunung Mulu.

Si bien desde la década de 1990 las agencias estatales han designado al menos 3,4 millones de hectáreas de zonas en su mayoría boscosas para el establecimiento de monocultivos, incluidas las plantaciones de palma aceitera, muchas de estas plantaciones aún no se han establecido completamente. **Por eso todavía existe la oportunidad de detener la destrucción de muchos territorios indígenas y reconocer sus derechos sobre sus tierras ancestrales. Esto protegería una superficie considerable de la actual cobertura forestal natural, lo que incluye a los bosques que constituyen el hogar de la comunidad de Kampung Batu Bungan, en Mulu, Sarawak.**

Sahabat Alam Malaysia, SAM (Amigos de la Tierra Malasia),

<https://www.foe-malaysia.org/>

(1) Bruno Manser Fonds, Save the Mulu Rainforest, <https://savemulu.org/en/news/banned-pesticide-found-in-mulu-oil-palm-plantation>

(2) Página web oficial del Departamento de Bosques de Sarawak, Desarrollo de las plantaciones forestales en Sarawak <https://forestry.sarawak.gov.my/page-0-362-1129-Forest-Plantation-Development-in-Sarawak.html> . Por más información ver “*Malaysian palm oil – Green gold or green wash*”, Amigos de la Tierra Internacional y otros grupos miembro, 2008, <https://www.foei.org/wp-content/uploads/2014/08/04-foei-sarawak-full-report-lr.pdf>

(3) Land Custody and Development Authority (PELITA), Plantation development, <http://www.pelita.gov.my/business/1> y Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority (SALCRA), Oil Palm, <http://www.salcra.gov.my/en/about-us/core-business/plantation/oil-palm.html>, Sarawak Plantation Berhad (SPB), Location of operation units, <http://www.spbgroup.com.my/locality-map.htm>

(4) Ministerio de Industrias Primarias, Aceite de Palma, <https://www.mpi.gov.my/index.php/en/statistic-on-commodity/dataset/711->

(5) SAM, *Urgent call to halt further forest conversions*, 2016, https://www.foe-malaysia.org/urgent_call_to_halt_further_forest_conversions

(6) Informe anual 2017, Departamento Forestal de Malasia Peninsular, https://www.forestry.gov.my/images/Laporan_Tahunan/2017/Laporan_Tahunan_2017.pdf

(7) Informe anual 2017, Departamento Forestal de Sabah, <https://www.forest.sabah.gov.my/ar2017/ar-2017.pdf>

Financiamiento engañoso: el apoyo del Fondo Verde para el Clima a REDD+



Río Amazonas, Satarem, Brasil.

El Fondo Verde para el Clima fue creado por los gobiernos con el objetivo de ayudar a los países del Sur global a responder al cambio climático. **En febrero de 2019, el Fondo aprobó un pago de 96 millones de dólares al gobierno de Brasil** - que lo había solicitado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - **por las emisiones de gases de efecto invernadero que no se liberaron a la atmósfera en los años 2014 y 2015.** La propuesta del PNUD sostiene que el gobierno de Brasil tomó medidas para reducir la deforestación. **Esta fue la primera vez que el Directorio del Fondo Verde para el Clima aprobó una solicitud de financiamiento para el llamado pago “basado en resultados” de REDD+.** (1) Los detalles de la decisión (ver más abajo) demuestran por qué es probable que una gran parte del pago se otorgue por reducciones de emisiones que solo existen en el papel.

El Fondo Verde para el Clima ha anunciado que en un futuro próximo proporcionará más fondos para las actividades REDD+. Una solicitud de financiamiento particularmente objetable proviene de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama del Banco Mundial que financia a las empresas del sector privado. **La CFI está pidiendo subvenciones para que las empresas puedan establecer nuevos proyectos REDD+ o vender sus créditos de carbono de los proyectos REDD+ ya existentes, proyectos que se sabe fueron origen de conflictos y polémica.**

¿Qué es el Fondo Verde para el Clima?

El Fondo Verde para el Clima fue creado en 2010 por los 194 países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). (2) Es

una de las formas como los gobiernos (principalmente, pero no exclusivamente, del Norte global) pueden transferir dinero que comprometieron en virtud del Acuerdo de París de la ONU sobre el cambio climático. El Fondo no implementa proyectos. En cambio, **asigna fondos para propuestas de proyectos presentadas por instituciones multilaterales como el PNUD, la CFI del Banco Mundial, así como organismos nacionales o regionales, entre ellos bancos de desarrollo o bancos privados y ONGs como WWF o Conservación Internacional.** Para fines de 2018, el Fondo Verde para el Clima autorizó a 75 entidades nacionales, regionales e internacionales del sector público y privado el presentar propuestas de financiamiento.

Cuando crearon el Fondo Verde para el Clima, 43 gobiernos nacionales se comprometieron a poner a su disposición un monto inicial de 10.300 millones de dólares. A fines de 2018 se había asignado un total de 4.600 millones de dólares a 93 propuestas de financiamiento que cubrían actividades en 96 países. De los fondos que quedan de las contribuciones iniciales de los gobiernos, se han reservado 600 millones de dólares para financiar proyectos que ya están en la línea de proyectos del Fondo Verde para el Clima. Esto incluye proyectos REDD+ como el otorgado al gobierno de Brasil en febrero de 2019, o una propuesta de la CFI que se espera sea presentada al Directorio del Fondo Verde para el Clima en julio de 2019. La propuesta de la CFI incluiría el comercio con créditos de REDD+ de proyectos REDD+ del sector privado.

Millones de dólares por ‘resultados’ en reducir la deforestación a pesar de que la deforestación va en aumento

En febrero de 2019, en su 22ª reunión, el Directorio del Fondo Verde para el Clima aprobó la primera solicitud de los llamados “pagos REDD+ basados en resultados”. En nombre del gobierno de Brasil, el organismo de desarrollo PNUD solicitó el pago de los “resultados logrados a través de REDD+ en el bioma de la Amazonia brasileña en 2014 y 2015”. **El Directorio acordó pagar 96 millones de dólares por 18,82 millones de toneladas de dióxido de carbono que, según el gobierno de Brasil, no fueron lanzados a la atmósfera como resultado de la acción del gobierno para reducir la deforestación en la Amazonia brasileña durante esos dos años.** En los documentos del proyecto, el PNUD y el gobierno de Brasil anuncian que “en el futuro” se presentará una segunda solicitud de pago por los resultados en la reducción de emisiones por deforestación supuestamente alcanzadas durante 2016 y 2017. (3)

El gobierno brasileño y el PNUD afirman que están solicitando el pago de solo una pequeña parte de los 2.390 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono que, según sus cálculos, no han sido liberadas como resultado de la reducción de la deforestación en la Amazonia brasileña entre 2014 y 2018.

¿Pero este cálculo es creíble? No realmente. Gran parte del pago del Fondo Verde para el Clima será, por lo tanto, para emisiones de dióxido de carbono que se liberaron a la atmósfera o para reservas que solo existen en el papel. Aquí está el por qué: **la solicitud de pago del PNUD calcula el volumen de emisiones que el gobierno de Brasil afirma haber reducido a través de REDD+ en 2014 y 2015 al comparar la deforestación registrada en 2014 (5.012km²) y 2015 (6.207 km²) con la deforestación promedio entre 1996 y 2010 (16.640 km²).** Este promedio incluye los años máximos de deforestación en la Amazonia brasileña y, por lo tanto, el promedio es muy alto.

En la jerga de las negociaciones de la ONU sobre el clima, este promedio se denomina “nivel de emisión de referencia de bosque”. Cuando el gobierno de Brasil presente este nivel de referencia de bosque a la ONU (que se usa para verificar si el gobierno de Brasil alcanzará las reducciones de emisiones que prometió en virtud del Acuerdo de París de la ONU de 2015), las cifras de las hectáreas se convierten en toneladas de carbono dióxido. (4) Ésta es también la unidad utilizada en la solicitud de pago del PNUD al Fondo Verde para el Clima: por cada tonelada de dióxido de carbono que el Fondo haya aceptado como “resultado REDD+”, éste paga cinco dólares. **Debido a que la deforestación promedio entre 1996 y 2010 fue tan alta (¡y se redujo antes de que existiera REDD+!), la deforestación real en la Amazonía brasileña hoy en día podría más que duplicarse, ¡y aún así el gobierno de Brasil podría reclamar el pago por los “resultados” en reducir la deforestación!**

Claramente, algo debe estar mal si un Fondo creado para financiar acciones que ayuden a evitar el caos climático está pagando 96 millones de dólares a un gobierno que anunció que reducirá aún más las medidas para reducir la deforestación, en una región donde la deforestación ya ha comenzado a aumentar nuevamente. (5) **El Fondo Verde para el Clima tampoco exige el compromiso de que el carbono por el cual se recibió el pago permanezca almacenado en el bosque después de efectuado el pago.** Con el aumento de la deforestación en la Amazonia brasileña, el pago de 96 millones de dólares podría tan solo retrasar algunos años las emisiones por deforestación.

Aun sin que medie el compromiso de mantener el carbono “almacenado” y sin ninguna información sobre la cantidad de carbono “ahorrado” como resultado de las actividades que serán financiadas por el Fondo Verde para el Clima, el pago, no obstante, se promociona como “basado en resultados”. El gobierno de Noruega, uno de los principales contribuyentes al Fondo Verde para el Clima y el mayor financiador de REDD+, anunció que duplicaría su contribución financiera al Fondo poco después de que el Directorio aprobara los fondos REDD+ para Brasil. (6)

Mientras se atrae a los campesinos a un Programa de Pago por Servicios Ambientales, la deforestación a gran escala continúa sin resolverse

Hay quienes sostienen que aún cuando los cálculos no sean tan precisos, el dinero al menos garantizará los fondos tan necesarios para los campesinos y los pueblos indígenas. En realidad, el dinero se utilizará para atraer a los campesinos a un Programa de Pago por Servicios Ambientales de seis años (llamado Floresta+). **Este programa no aborda la subyacente inseguridad en materia de tenencia de la tierra ni la falta de apoyo de las políticas gubernamentales a la agricultura campesina. En cambio, estimula aún más la intensificación de las prácticas agrícolas, pagándole a los agricultores si usan menos del 20 por ciento permitido legalmente de sus tierras. En contraste, la deforestación a gran escala como resultado de la destrucción empresarial por la cría de ganado o los monocultivos de soja o eucalipto, continuará sin restricciones.**

¿Ampliando la subvención de proyectos REDD+ del sector privado en conflicto con las comunidades?

En su reunión de julio de 2019, el Directorio del Fondo Verde para el Clima tendrá que decidir sobre una solicitud de financiamiento REDD+ aún más perjudicial para el clima. **La Corporación Financiera Internacional (CFI), el organismo del Banco Mundial que**

financia al sector privado (empresas) se está preparando para solicitar el financiamiento de un “Programa de bonos forestales multinacionales”, “para evitar la deforestación en múltiples cuencas forestales mediante el aprovechamiento del potencial de inversión de los mercados de capital. Financiar actividades REDD+ y ofrecer apoyo en materia de precios a los créditos de carbono demostrará un modelo de financiamiento basado en resultados”. (7)

Hay numerosas razones para que el Directorio del Fondo Verde para el Clima rechace esta propuesta, entre ellas:

- La CFI ya lanzó en 2017 una iniciativa de “Bonos Forestales” que ofrece a los inversores (“propietarios de bonos”) la posibilidad de elegir entre recibir créditos REDD+ del controvertido proyecto REDD+ del Corredor Kasigau en Kenia, o recibir el pago anual de intereses en efectivo. Según se informa, ni un solo “propietario de bonos” de los Bonos Forestales quiso recibir su pago anual de intereses en forma de créditos REDD+.
- El dinero que la CFI recauda de la venta de los “bonos forestales” **no** se invierte en protección de los bosques. De hecho, las inversiones financiadas con este dinero pueden incluso ser causa de deforestación. El único financiamiento que se destina a los “bosques” (en forma de una subvención a los especuladores del proyecto REDD+ del sector privado) es el contrato de compra que se firmará con los dueños del proyecto REDD+ que proporcionarán los créditos REDD+ que los propietarios de bonos pueden elegir en lugar del pago en efectivo del interés anual. Estos proyectos REDD+ del sector privado han demostrado ser particularmente polémicos. (8)
- El dinero del Fondo Verde para el Clima se usará para que la CFI (o una compañía en nombre de la CFI) sea compensada si tiene que vender (o dar) los créditos REDD+ por menos dinero del que los compraron. No hay ningún beneficio para el clima en una subvención de este tipo (que en su propuesta, la CFI llama “Fondo de liquidez”). En la propuesta del proyecto, la CFI propone pagar los cinco dólares habituales por crédito REDD+; pero como se mencionó anteriormente, los propietarios de bonos del Bono Forestal 2017 prefirieron recibir sus pagos anuales en efectivo en lugar de recibir créditos REDD+ al precio de cinco dólares por crédito.
- Aunque se afirmó que REDD+ es un mecanismo para atraer fondos del sector privado a la protección de los bosques, el sector privado no ha mostrado mucho interés en invertir en proyectos REDD+, lo cual es una buena señal, ya que casi todos los proyectos REDD+ existentes han provocado conflictos con las comunidades y ninguno puede garantizar la contribución a la protección del clima que dicen ofrecer. La propuesta de la CFI es brindar préstamos baratos y ayudar a la comercialización de los créditos REDD+ a inversionistas del sector privado potencialmente interesados en establecer nuevos proyectos REDD+. Como se mencionó anteriormente, los proyectos REDD+ del sector privado no traerán nada bueno a las comunidades del bosque ni al clima.
- Además, los proyectos REDD+ del sector privado complicarán la contabilidad de las emisiones de carbono por parte de los gobiernos: si un inversor del sector privado vende créditos de carbono de un proyecto REDD+ a la CFI o a otra persona, el gobierno del país en el que se está ejecutando el proyecto REDD+ tendrá que eliminar las toneladas de carbono vendidas como créditos REDD+ de su balance nacional de carbono. Este balance se

supone que deben hacer un seguimiento de los compromisos y acciones nacionales a escala internacional. Si los países no sacan de su contabilidad las toneladas que se venden como créditos REDD+, la misma tonelada de carbono se contaría dos veces, por el comprador del crédito REDD+ y en el balance del carbono del gobierno. En el lenguaje de los negociadores de la ONU sobre el clima, esto se llama “doble contabilidad”.

En resumen, **la aprobación de los fondos de la CFI equivaldría a un desperdicio masivo del escaso dinero del Fondo Verde para el Clima**. El dinero subvencionaría los proyectos REDD+ del sector privado, que inevitablemente causan conflictos con las comunidades que dependen de los bosques y es poco probable que aborden los factores de la deforestación a gran escala.

El entusiasmo del Fondo Verde para el Clima por pagar “resultados REDD+” (¡incluso cuando no hay resultados verificables!) y subvencionar la compensación de carbono, llega en un momento en que está más claro que nunca que la era de la compensación ha terminado. **Es imperioso que haya una reducción real de las emisiones: en otras palabras, el petróleo debe permanecer bajo el suelo y el carbón en el agujero.** (9) También coincide con el reconocimiento por parte de muchos de los defensores iniciales de REDD+, de que REDD+ es el instrumento equivocado para hacer frente a los agentes de la deforestación a gran escala. (10) Este análisis, así como la documentación de los conflictos y la violación de los derechos de las comunidades que dependen de los bosques - en la que regularmente se ven involucrados los proyectos REDD+ del sector privado -, parecen haber escapado hasta ahora a la atención de los miembros del Directorio del Fondo Verde para el Clima. **A partir de la experiencia con REDD+ no hay argumentos para que el Directorio del Fondo Verde para el Clima apruebe la subvención de los proyectos REDD+ del sector privado.**

Jutta Kill, jutta@wrm.org.uy

Miembro de la Secretaría Internacional del WRM

(1) La sigla REDD significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques. El “plus” de REDD+ indica que la conservación de los bosques, el manejo forestal sostenible y la forestación también califican como actividades REDD+.

(2) Para obtener más información del *Green Climate Fund*, consultar (en inglés) *About the Fund - Green Climate Fund*. <https://www.greenclimate.fund/who-we-are/about-the-fund> Para obtener una explicación de cómo el Fondo Verde para el Clima subvenciona a REDD+, consultar (en inglés): Kill, Jutta y Liane Schalatek. *Green Climate Fund and REDD+: Funding the Paradigm Shift or Another Lost Decade for Forests and the Climate?* Washington, DC: Heinrich Boll Stiftung, 2019. <https://us.boell.org/2019/03/21/green-climate-fund-and-redd-funding-paradigm-shift-or-another-lost-decade-forests-and>

(3) Para obtener información sobre el proyecto, consultar la página web del Fondo Verde para el Clima para Brasil (en inglés): <https://www.greenclimate.fund/countries/brazil>

(4) Las cifras del gobierno sobre las emisiones de dióxido de carbono derivadas de la deforestación tienen poca relación con la cantidad de dióxido de carbono que se libera realmente a la atmósfera cuando se destruyen los bosques. Por ejemplo, la mayoría de los gobiernos, incluido el gobierno de Brasil, no incluyen las emisiones de los incendios forestales provocados por las sequías en los datos que el gobierno presenta a la convención de la ONU sobre el clima.

(5) Ver, por ejemplo, Bradford, S. y M. Torres (2017): *Brazil on verge of legitimizing Amazon land theft on a grand scale, warn NGOs*. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2017/06/brazil-on-verge-of-legitimizing-amazon-land-theft-on-a-grand-scale/> y Lang, Ch. (2019): *Brazil's funding proposal for REDD results-based payments to the Green Climate Fund would set a terrible precedent*. <https://redd-monitor.org/>

(6) Usher, Ann Danaiya. "Brazil receives first Green Climate Fund grant for REDD+. Critics warn of 'paper reductions' with no real climate benefits." *Development Today*, 15 de marzo de 2019.

(7) Pueden ver la presentación *Green Climate Fund's Private Sector Facility and the REDD+ Results-Based Payments* en la sección 4 de la 18ª reunión del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF): <https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-eighteenth-cf18-junio-20-22-2018-paris>

(8) ReCommon (2016): Mad Carbon Laundering. How the IFC subsidizes mining companies and failing REDD projects. <https://www.recommon.org/eng/mad-carbon-laundering/>

(9) Lund, J.F. et al. (2017): *Promising Change, Delivering Continuity: REDD+ as Conservation Fad*. World Development. Volumen 89, enero 2017: 124-139

(10) El portal web de *REDD Monitor* proporciona una cobertura exhaustiva de la amplia gama de controversias, incoherencias, contradicciones y conflictos asociados con REDD+ y los mecanismos de pago basados en resultados para REDD+: www.redd-monitor.org. Otra fuente de información sobre REDD+, que incluye un mapa para localizar una amplia gama de publicaciones académicas y de ONGs sobre REDD+, es el *Webdossier New Economy with Nature* de la Fundación Heinrich Böll. <https://www.boell.de/en/dossier-new-economy-nature>

Intento de recolonizar los bosques de la India. El nuevo proyecto de enmiendas a la Ley sobre bosques



Protestas contra las expulsiones en el norte de Bengala: "Vamos a resistir los intentos de expulsiones de las comunidades de los bosques". Foto: Swarup Saha

A medida que se acercan las elecciones generales que definirán un nuevo parlamento en la India, **se amplía la ofensiva del gobierno de extrema derecha del *Bharatiya Janata Party* (BJP, Partido Popular Indio), contra los bosques y las comunidades de los bosques en la India.** A principios de este año, este gobierno - que favorece descaradamente a las empresas - no defendió la histórica Ley de los Derechos sobre los Bosques de 2006 (FRA, por su sigla en inglés), en ocasión de una decisión adoptada por la Suprema Corte. Esto generó una situación en la que alrededor de 10 millones de habitantes de los bosques de la India enfrentan ahora la posibilidad de ser desalojados de sus tierras (1). El gobierno a propuesto ahora **nuevas enmiendas a la Ley sobre los Bosques de la época colonial, que no solo harían que la burocracia forestal sea más poderosa que nunca sino que también pondría fin por completo a la Ley de los Derechos sobre los Bosques, además de legalizar la entrada de grandes empresas a los bosques.**

La Ley de los Derechos sobre los Bosques (FRA) es una ley fundamental que reconoce numerosos derechos de los *Adivasis* (pueblos indígenas) y de otras comunidades tradicionales que viven en los bosques. También empodera a las asambleas de las aldeas, las *Gram Sabhas*, para gobernar sus propios bosques y otros bosques de los que

dependen. La FRA ha sido atacada desde su inicio, no solo por la industria de plantaciones de árboles y de la minería, por nombrar algunas, sino también por la industria de la conservación. (2)

El 7 de marzo de 2019, el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático (MoEFCC) envió el proyecto de enmiendas a la Ley sobre los Bosques de la India de 1927, durante la época colonial, (IFA) a los gobiernos de varios estados para que enviaran sus comentarios, aunque aún no se ha publicado oficialmente para comentarios públicos. **Grupos activistas consideran que las propuestas de enmienda a la ley IFA crearían una versión peor que la de la época colonial: perpetúa la misma injusticia histórica contra las comunidades de los bosques** que la FRA había tratado de revertir. (3) **Se trata de un intento de recolonizar el actual régimen colonial preponderante**, en lugar de democratizarlo para que la Ley pueda satisfacer las necesidades ambientales, de derechos y medios de vida de las comunidades, a través de su principal institución que son las *Gram Sabhas*, dicen los grupos.

Mayor coerción, mayor control estatal

De acuerdo con las enmiendas propuestas, el Estado nombraría Funcionarios de Asentamientos Forestales que “determinarían” toda clase de derechos sobre los bosques. A menos que sean declarados, sancionados y registrados de manera explícita, por escrito, **los derechos de las comunidades se extinguirían. Las enmiendas no prevén ninguna función para instituciones comunitarias como las *Gram Sabhas* en todo el proceso de reconocimiento de derechos**; sin embargo, la FRA sí prevé tal función. Además, incluso en los casos de derechos debidamente registrados, estos pueden ser “adquiridos” en interés de la conservación y luego “conmutados”, lo que significa que es posible pagarles a los titulares de derechos, independientemente de la naturaleza, escala y ubicación de los derechos sobre los bosques.

En lugar de eliminar los casos de delitos forestales, como lo piden varios grupos de la sociedad civil, **se criminalizarían todos los usos posibles de los bosques por parte de las comunidades (a menos que los funcionarios forestales lo permitan)**. Entrar en un bosque sin permiso constituiría un “delito forestal”. Las personas pueden ser detenidas por la simple sospecha de la posibilidad de que cometan un delito, y pueden irrumpir y registrar sus casas, todo ello sin ninguna orden judicial. Estas disposiciones violan los artículos 21 y 22 de la Constitución de la India, como lo señalaron numerosos grupos activistas. (4)

Las enmiendas propuestas introducen una nueva categoría jurídica llamada “bosques productivos”, que abre espacio a la privatización a gran escala. Estos nuevos “bosques productivos”, que pueden ser registrados en cualquiera de los tipos de bosques, pueden utilizarse para actividades consideradas “sostenibles”, como la tala, las plantaciones de monocultivos comerciales y el comercio de servicios de los ecosistemas, en especial el comercio de carbono en el marco de REDD-plus.

En el caso de que surjan posibles conflictos por la propiedad y el control de los bosques entre el Estado y personas o aldeas, el Estado puede quedarse con estos bosques.

Reformas políticas: los movimientos usan la FRA para parar la deforestación

Este giro de los acontecimientos no fue inesperado. Las reformas políticas neoliberales promulgadas o propuestas en los últimos cinco años buscan deshacer las reformas democráticas como la histórica Ley de los Derechos sobre los Bosques (FRA) de 2006 y las Enmiendas a la Ley de Protección de la Vida Silvestre de 2006, iniciadas durante el anterior gobierno de la Alianza Progresista Unida (UPA). Ambas leyes, en particular la FRA junto con

la Política Forestal Nacional de 1988 y la PESA de 1996 (Ley de extensión de Panchayat a las áreas tribales), buscaron proporcionar un marco de políticas que trajera cierto alivio a las asediadas comunidades de los bosques de la India y marcó importantes alejamientos del modelo colonial de manejo de los bosques basado en la coerción y la extracción.

La FRA, en particular, busca reemplazar el infausto *raj* - el régimen feudo-colonial de la burocracia forestal - por un control y gobernanza descentralizados y localizados. A largo plazo, esto permitirá bosques biodiversos mejor cuidados, en lugar de un *bricolage* de talas madereras, monocultivos comerciales y los llamados parques de vida silvestre “libres de humanos”, todo lo que desplaza implacablemente los bosques y sus complejas ecologías constituidas por habitantes humanos y no humanos. No es de extrañar que el Estado no estuviera dispuesto a implementar la FRA. Los funcionarios forestales de todos los rangos, los medios de comunicación de propiedad de empresas y las grandes ONG conservacionistas se opusieron a la FRA desde el primer día. A la inversa, los nuevos movimientos críticos de las industrias extractivas y del estrangulamiento estatal sobre los bosques comenzaron a movilizarse cada vez más en torno a la implementación de la FRA. **Los nuevos movimientos recogieron antiguos legados y convirtieron leyes estatales como la FRA y PESA en ámbitos de nuevas luchas.**

En las últimas dos décadas surgieron fuertes movimientos tribales y campesinos contra la minería y la introducción forzada de la industrialización en zonas costeras y de bosque en Odisha. En Niyamgiri, Dongria Kondh, una típica comunidad del bosque se movilizó exitosamente contra un proyecto de minería de bauxita propuesto por el tristemente célebre grupo Vedanta, que de lo contrario habría destruido sus bosques y sus medios de subsistencia. Al igual que en Niyamgiri, los agricultores de Jagatsingpur invocaron con éxito la FRA en su larga lucha contra la adquisición forzada de tierras por parte del Estado para establecer una enorme fábrica del gigante coreano de acero Posco. En Mahan, Madhya Pradesh, las comunidades del bosque organizadas bajo la bandera del *Mahan Sagharsh Samiti* (MSS) lograron detener un proyecto de extracción de carbón, propiedad conjunta de Esaar e Hindalco, que amenazaba destruir más de 486.000 hectáreas de los antiguos bosques de la especie *Shorea robusta* y desplazar 54 aldeas que dependen de los bosques, con sus 500.000 residentes. (5) Las comunidades de los bosques, entre ellas la comunidad indígena Madia Gonds, del distrito Gadchiroli, en Maharashtra, se han opuesto durante mucho tiempo al proyecto de establecer una cadena de minas de hierro, que destruiría aproximadamente 15.000 hectáreas de bosques densos y afectaría otras 16.000 hectáreas. En la zona vecina de Korchi, la fuerte resistencia de la comunidad forzó el retiro prematuro de un proyecto de minería de hierro. (6) En los distritos de Sarguja y Raigarh, en Chattisgarh, las comunidades se movilizaron contra la minería de carbón. (7) En otras zonas de Chattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Jharkhand y West Bengal, las comunidades y sus movimientos asumieron el control de sus espacios en los bosques, obstaculizando, y a veces deteniendo, las actividades de tala del departamento forestal. (8)

El Estado responde con más deforestación

Aunque la resistencia popular ha estado haciendo uso de leyes estatales como la FRA y PESA para frenar la deforestación y se han formulado disposiciones jurídicas para el control comunitario de los bosques, esto no pareció haber disuadido al estado indio de su propósito de seguir avanzando con la deforestación organizada.

Según estadísticas oficiales recabadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático, **en el periodo 1980-2019 se destinaron 1,5 millones de hectáreas de bosques a diversos fines.** De este total, más de medio millón fueron para **minería**, el resto para **energía térmica, líneas de transmisión, represas** y otros proyectos. (9) Tan solo en los últimos tres años (2015-18) el gobierno de la India ha otorgado “zonas de tala” para

realizar extracción maderera en más de 20.000 hectáreas de bosques (10), la mayoría de ellos densos.

En el marco de la FRA, el proceso de destinar bosques a diversos propósitos incluye obligatoriamente el consentimiento de la comunidad para completar el proceso de reconocimiento de los derechos sobre el bosque, lo que ha significado que **tales zonas de tala se han emitido habitualmente a partir de consentimientos obtenidos en gran medida a fuerza de coacción y fraude.** (11) El gobierno considera a esos desenfundados “cambios” en tierras de bosques como agentes de una deforestación “organizada” y “gestionada”, y aparentemente no registra las emisiones causadas por esas actividades en su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, recauda enormes sumas de dinero de los usuarios comerciales de los bosques, de acuerdo a su **polémico protocolo de Forestación Compensatoria (CA, por su sigla en inglés), que obliga a las industrias y otros usuarios de los bosques a pagar para “compensar” la destrucción que causan con nuevas plantaciones y servicios ecosistémicos.** (12) Después de la promulgación de la Ley de Forestación Compensatoria de 2016 (Ley de la CAF), los fondos acumulados por la Forestación Compensatoria llegarían ahora a los departamentos forestales estatales con mayor facilidad y, según los grupos de activistas, **estos se utilizarían cada vez más para socavar el control comunitario de los bosques.** Ignorando por completo la oposición generalizada a la nueva ley CAF y en una abyecta violación de la FRA, el estado indio trata de institucionalizar y legitimar la venta de los bosques del país.

El ataque a la FRA: las reformas neoliberales

Si bien los esfuerzos para diluir la Ley de los Derechos sobre los Bosques comenzaron durante el mandato del anterior gobierno de la Alianza Progresista Unida (UPA), los ataques sistemáticos e implacables a la legislación se efectuaron recién después de que el actual gobierno del BJP llegara al poder en 2014. En el mismo año se lanzó la estrategia REDD plus, que exigía una mayor mercantilización de los bosques de la India en nombre de la mitigación del cambio climático. En 2015, el gobierno presentó una receta para privatizar los bosques de la India, que tuvo que ser archivada debido a las protestas generalizadas. En 2016 se aprobó la infame Ley de Forestación Compensatoria. En 2018 se lanzó la Política Nacional de Bosques, que dispuso, entre otras cosas, el ingreso sin trabas del capital empresarial a la silvicultura, además de legalizar la gestión conjunta de los bosques (JFM, por su sigla en inglés), un sistema de “gestión forestal participativa” en el que el Departamento Forestal crea y controla comunidades para la protección de los bosques.

A pesar de la FRA y sus disposiciones que conllevan un empoderamiento de las comunidades, el acceso de éstas a los bosques siempre ha sido restringido y criminalizado: el Estado continúa acosando y persiguiendo a las comunidades y los movimientos que intentan implementar la FRA por su cuenta, y se interponen causas penales no solo contra activistas de las comunidades y miembros de las *Gram Sabha* que reivindican sus derechos y poderes contemplados por la FRA sino también contra personas marginadas que no conocen la ley. Los informes (2014, 2015) del Departamento Nacional de Archivos Criminológicos (*National Crime Record Bureau*) sobre delitos ambientales en la India revelan que el 77 por ciento de un total de 5.846 casos registrados en 2014, están relacionados con violaciones derivadas de la Ley sobre los Bosques de la India, de 1927, y de la Ley de protección de la vida silvestre. La mayoría de los casos fueron contra comunidades y pueblos tribales. (13)

Esta secuencia de eventos encarna un interminable ciclo de represión por parte del Estado, cuyas instancias más recientes son la muy discutida orden de desalojo de febrero de 2019 por la Suprema Corte de la India y las enmiendas propuestas por el gobierno a la Ley sobre los bosques de la India. El 13 de febrero de 2019, la Suprema

Corte, al tiempo que atendía una petición pendiente desde hacía mucho tiempo contra la FRA (el argumento era que conceder más derechos sobre los bosques implicaba un aumento de la deforestación, y que los titulares de derechos eran en gran parte “invasores” de bosques estatales) presentada por ciertas ONG conservacionistas y funcionarios forestales retirados, ordenó que en todos los casos de “rechazo definitivo” de las reclamaciones de derechos sobre los bosques contemplados en la FRA, los demandantes debían ser desalojados en forma sumaria. De ser llevada a cabo, esta orden significaría el desalojo de unos diez millones de habitantes de los bosques. Después de fuertes protestas de todos los sectores de la sociedad, el desalojo fue suspendido temporalmente. Inmediatamente después, el gobierno presentó el proyecto de enmiendas a la Ley sobre los bosques de la India que, de hecho, pone fin a la FRA y otorga a los funcionarios forestales autoridad exclusiva para **privatizar los bosques y negarles a las comunidades derechos sobre los bosques, aparentemente en aras del interés por la mitigación del cambio climático, la silvicultura para la “producción” y la conservación.** (14)

Soumitra Ghosh

All India Forum of Forest Movements (AIFFM)

- (1) Ver Boletín 242 del WRM: Mujeres indígenas Baiga en India: “Nuestra historia debe ser escuchada”, febrero de 2019, <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/mujeres-indigenas-baiga-en-india-nuestra-historia-debe-ser-escuchada/>
- (2) Por más información sobre la FRA y otros movimientos de los bosques en India ver boletín 209 del WRM: “Las luchas por los bosques de la India – la búsqueda de alternativas”, <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/las-luchas-por-los-bosques-de-la-india-la-busqueda-de-alternativas/>
- (3) Comunicado conjunto de *Community Forest Resources-Learning and Advocacy* (CFR-LA), *All India Forum of Forest Movements* (AIFFM), *Mahila Kisan Adhikar Manch* (MAKAAM) y *Akhil Bharatiya Mazdoor Kisan Sangharsh Samiti* (ABMKSS), también comunicados aparte de AIFFM y Campaign for Survival and Dignity (CSD)
- (4) *ibid*
- (5) Ver (en inglés) <https://www.greenpeace.org/india/en/issues/environment/2547/mahan-gram-sabha-to-be-held-behind-a-curtain-as-police-seize-signal-booster-solar-panels-and-other-communication-equipment>. En marzo de 2015, el Ministerio de Medio Ambiente rechazó el permiso al proyecto Mahan. Posteriormente, el Ministerio del Carbón anunció que no se licitaría el proyecto de extracción de carbón en Mahan: Ver (en inglés) <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-32443739>
- (6) Solo en Korchi se propusieron 12 contratos mineros que causarían impactos en 1.032,66 hectáreas. Ver Neema Pathak Broome. N.P, Bajpai. S y Shende. M(2016): *Reinventando el bienestar: pueblos de Korchi taluka, India, resisten la minería y abren espacios de autogobierno*: <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/reinventando-el-bienestar-pueblos-de-korchi-taluka-india-resisten-la-mineria-y-abren-espacios-de-autogobierno/> Ver también <https://www.downtoearth.org.in/news/mining/experts-panel-red-flags-power-mining-projects-in-western-ghats-37201> y <http://cat.org.in/portfolio/tribals-oppose-cluster-of-4-iron-ore-mines-in-zendepar/>
- (7) Ver también Sethi. N: *Five coal blocks in Chhattisgarh might see land conflict*, 15 de enero de 2015: https://www.business-standard.com/article/economy-policy/five-coal-blocks-in-chhattisgarh-might-see-land-conflict-115011500019_1.html
- (8) Entrevistas con activistas de *All India Forum of Forest Movements* (AIFFM).
- (9) http://egreenwatch.nic.in/FCAPProjects/Public/Rpt_State_Wise_Count_FCA_projects.aspx
- (10) Según información presentada en el Parlamento, Telangana encabezó la lista con 5.137,38 hectáreas, seguido de Madhya Pradesh, con 4.093,38 y Odisha con 3.386,67 hectáreas. Ver <https://scroll.in/article/908209/in-three-years-centre-has-diverted-forest-land-the-size-of-kolkata-for-development-projects>
- (11) *Mahan Gram Sabha to be Held ‘Behind a Curtain’ as Police Seize Signal Booster, Solar Panels and Other Communication Equipment*, Comunicado de prensa de Greenpeace India. Ver: <https://www.greenpeace.org/india/en/issues/environment/2547/mahan-gram-sabha-to-be-held-behind-a-curtain-as-police-seize-signal-booster-solar-panels-and-other-communication-equipment/>
- (12) Ver boletín 217 del WRM, “La deforestación financia más plantaciones: el nuevo Proyecto de ley del Fondo de Forestación Compensatoria en la India”, septiembre de 2015,

<https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/la-deforestacion-financia-mas-plantaciones-el-nuevo-proyecto-de-ley-del-fondo-de-forestacion-compensatoria-en-la-india/>

(13) Observaciones de Geetanjoy Sahu, *School of Habitat Studies, Tata Institute of Social Sciences (TISS)*: comunicación por correo electrónico

(14) Ver https://www.business-standard.com/article/economy-policy/modi-govt-s-move-to-amend-forest-act-takes-a-giant-leap-backwards-119040101292_1.html El Preámbulo del Proyecto de

Enmiendas dice que considerando que es imperativo conservar los bosques, mejorar los servicios de los ecosistemas que provienen de los bosques, asegurar la estabilidad ambiental y el bienestar de las personas en general y de las personas que dependen de los bosques en particular, cumplir con las aspiraciones de desarrollo nacional y los diversos compromisos internacionales, fortalecer y respaldar los conocimientos tradicionales basados en los bosques y todos los asuntos relacionados con los mismos, con la participación popular, y ofrecer una legislación integral para abordar los temas relacionados con el sector forestal, se promulga la (Enmienda) a Ley de los Bosques de la India (2019) (...)

Ecuador: relatos del despojo y deforestación provocadas por la extracción de palma y madera



Foto: Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador

La comunidad de Wimbí en Esmeraldas, al norte del litoral ecuatoriano, lucha por la defensa de su territorio contra el avance de la palma africana, de la mano de la empresa Energy&Palma. Esta es una historia de pillaje, en donde **el incremento de la deforestación en la selva del Chocó ha ido en paralelo a la expansión del cultivo. Un saqueo perpetrado por poderosos actores de la agroindustria ecuatoriana, de la mano de empresas madereras**, y con la complicidad del Estado, incapaz de garantizar los derechos ancestrales de las comunidades que por más de 300 años habitan en este espacio.

La producción de palma africana para la exportación de sus derivados comenzó en Ecuador en la década de los 1980s. No obstante, los últimos 20 años han visto un fuerte crecimiento de este cultivo en el país. En 1995, la superficie ocupada por el cultivo se situaba en las 105 855 hectáreas mientras que para 2017, esta cifra subió hasta las 319 000 hectáreas (1). Por su parte, la provincia de Esmeraldas concentra casi la mitad de la producción nacional (2). **En esta misma provincia se calcula que las plantaciones de palma ha supuesto la deforestación de al menos 100 000 hectáreas de zonas de manglar y bosque nublado del Chocó (3).**

Desde Marzo de 2017, el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador (CGCE) (4) ha venido trabajando con la comunidad de Wimbí. Ante la **creciente presión de las empresas palmicultoras y los traficantes de tierra**, los comuneros decidieron solicitarles apoyo en el levantamiento y sistematización de información geográfica vinculada al conflicto. Todo esto con el objetivo de apoyar en los procesos judiciales que la comunidad tiene en marcha para defender su espacio de vida.

Una larga historia de conflictos extractivos

El bosque del Chocó está habitado por diversas comunidades tradicionales e indígenas, y es ahí donde la empresa Energy&Palma está avanzando. El interés de las industrias en el lugar sin embargo no es nuevo, y su historia ha de comprenderse en gran parte a partir de las sucesivas olas de inversión, la ampliación de la frontera agrícola y los despojos generados por fases sucesivas de intentar integrar a Esmeraldas en la economía nacional y en el mercado mundial.

El territorio de la comunidad Wimbí vivió el “boom” del banano en la década de los 1960s. La actividad minera artesanal fue también una constante. Sin embargo, las nuevas formas de minería ilegal introducidas progresivamente en las últimas décadas, llevadas muy a menudo a cabo por personas ajenas a la comunidad, involucran el uso de una gran cantidad de químicos que contaminan las aguas y tienen graves efectos en la salud de los habitantes. Además, en los últimos 30 años, las madereras han avanzado sobre territorio comunitario, negociando y pactando en ocasiones o simplemente por la vía de los hechos en muchas otras. Todo esto se suma a los conflictos más recientes con las empresas palmicultoras.

La entrada de la empresa Energy&Palma

La empresa Energy&Palma es parte del grupo La Fabril, creado en 2006. Antiguamente denominada Palmeras del Pacífico, **Energy&Palma representa la tercera empresa más grande del sector, concentrando el 10% de la producción nacional.** Cuenta tanto con plantaciones propias como con plantas de procesamiento en Esmeraldas y Santo Domingo y recientemente ha obtenido certificados de “responsabilidad social” dentro de su estrategia de ventas de aparentar que produce un “aceite de palma sostenible” (5). La realidad en las comunidades afectadas sin embargo evidencia lo que se esconde detrás de dichas certificaciones.

Los conflictos de Energy&Palma con los habitantes de Wimbí comenzaron a escalar con un proceso de compra-venta de tierra que esta empresa efectuó con el señor Miguel Egas, quien a su vez está vinculado a unos juicios para la venta de tierras y la re zonificación de las áreas comunales en esta área (6). Esos lotes, en donde en ese entonces varias familias tenían cultivos de alimentos para el autoconsumo, fueron reclamados por la empresa. Mientras la comunidad luchaba por recuperar sus terrenos, el juez determinó que la compra-venta había sido legal y que los terrenos estaban a disposición de la empresa.

Sin embargo, **la empresa ya había tratado de seducir a los comuneros antes del juicio para que vendieran sus tierras a cambio de puestos de trabajo en las plantaciones.** La contundente negativa de éstos, alertados por las experiencias de otras muchas comunidades y pueblos aledaños, llevó a la empresa a buscar otros medios de expandirse en la zona. Wimbí se sitúa justamente en la frontera de avance de las empresas palmeras, en los límites hasta donde llegan los cultivos.

Wimbí lleva reclamando el reconocimiento de la ancestralidad de su territorio al estado Ecuatoriano desde hace décadas. Esta solicitud ha sido avalada por estudios antropológicos que atestiguan la existencia de una cultura y vínculos de estas personas con la tierra que habitan desde hace 300 años. Dicho reconocimiento oficial es de vital

importancia para la comunidad dado que la Constitución Ecuatoriana protege a este tipo de áreas y sus pueblos garantizando la regulación de su territorio bajo demarcaciones específicas.

A pesar de esto, según el gerente de la empresa Energy&Palma, las comunidades de la zona resultan ser las invasoras de los terrenos, aprovechándose de las empresas a las que extorsionan para sacar algún tipo de rédito.

Así pues, la expulsión de los comuneros de esta parte de sus tierras se consumó en los primeros meses del 2017 con el aval judicial, destruyendo las zonas de cultivos comunitarios. Pero **los comuneros de Wimbí no han cesado de luchar por lo que consideran es suyo**. En agosto de 2017, parte de estos terrenos fueron retomados por personas de la comunidad, quienes volvieron a sembrar café y cítricos, en un acto de reivindicación de su territorio.

El territorio de Wimbí en la actualidad

Los comuneros reportan que su territorio abarca un aproximado de 22 mil hectáreas. Podemos dividir esta extensión en tres tipos en función de la tenencia de la tierra. La zona I es la mayor (16 286 ha) y se distingue por ser el territorio perteneciente a Wimbí que formalmente está integrado a la comunidad Río Santiago Cayapas. La zona II (5 050 ha) se caracteriza por encontrarse en situación de inseguridad jurídica dado que la mayor parte no tiene escrituras formales. Y la zona III (664 ha) es la única titularizada a nombre de la comunidad. El trabajo realizado por el CGCE se ha centrado fundamentalmente en la zona II debido a que es el área con más conflictos y peligro de despojo en estos momentos.

En la zona II, un total de 100 hectáreas ya han sido despojadas por la empresa. Sus intereses de expansión, enfocados en las tierras más bajas donde la implantación de los monocultivos sería más viable económicamente, abarca aproximadamente 1 430 hectáreas.

También identificamos que al noreste de la comunidad, **Wimbí hace frontera con la empresa maderera conocida como Plywood, perteneciente al grupo Peña Durini**, con la que hace tiempo pactaron su presencia en el territorio. Actualmente la comunidad mantiene relaciones relativamente tranquilas con esta empresa y el conflicto parece haberse concentrado hacia la actividad palmera. Esto puede deberse a que **los monocultivos de palma hacen imposible cualquier otro tipo de actividad en el territorio que ocupan y tiene un fuerte impacto en las relaciones sociales y económicas del lugar**. La pérdida de los cultivos de los comuneros hace que estos se vean más presionados para buscar fuentes de trabajo asalariado en otra parte, incluyendo la propia empresa palmera que los desalojó. Sin embargo, las relaciones con los madereros no son siempre tranquilas.

Según nos relatan los comuneros -varios de ellos frecuentan el área para ir a cazar- **los madereros buscan los árboles maderables en un perímetro a lo largo de todo el camino, bajando hasta los ríos**. Evitan sin embargo bajar con los troncos para no ser vistos por la gente de la comunidad. En cambio, los extraen por la trocha en camionetas hacia el noreste, en donde ésta se junta con otros caminos secundarios.

Una vez más, el traficante de tierras Miguel Egas aparece involucrado. Los propios líderes comunitarios han podido averiguar que los trabajadores le arriendan el permiso de extracción de madera. No obstante, **la extracción de madera está siguiendo el camino abierto, y afecta a terrenos de la comunidad**. Es más, pudimos constatar cómo los puntos de acumulación de madera se sitúan junto a la zona III de la comunidad, es decir, la zona en la que sí cuentan con títulos formales.

El territorio de Wimbí a lo largo del tiempo

A partir de diálogos con las personas mayores de la comunidad, entendimos que tan sólo dos generaciones atrás, era común que algunos habitantes de Wimbí estuvieran dispersos para poder cultivar en los linderos de los ríos, lavar oro y cazar en la selva. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo estas personas fueron siendo menos. La bajada drástica del precio del banano, el aumento de la migración al exterior y las duras condiciones de vida aguas arriba propiciaron el abandono de las casas ubicadas en los trechos de los ríos.

Otro elemento es la antigua vía del tren, en la parte noreste. En la época en la que el ferrocarril estuvo activo, había varias familias de comuneros con cultivos próximos a la ferrovía, dado que era relativamente fácil llevarlos al puerto cargándolos en los vagones. La suspensión del ferrocarril en la década de los 90 significó que cultivar en distancias tan alejadas dejara de tener sentido y estas personas abandonaron sus tierras.

Una de estas últimas tensiones comprende precisamente a la maderera Plywood. Actualmente esta empresa está en terrenos que antiguamente pertenecían a la comunidad. En conversaciones con los comuneros, pudimos sacar en claro que la presencia de la maderera hoy es producto de una negociación de mutuo acuerdo. **Antes de la llegada de la empresa, el río era el único camino posible para llegar a Wimbí. Sus habitantes accedieron a que ésta se instalara en estos terrenos con la condición de que abriese el único y actual camino** carrozable -un camino en condiciones precarias- que mejoró considerablemente la conexión de la comunidad con el resto de la provincia -ahora se tarda “tan sólo dos horas en llegar a la vía asfaltada”.

“Este carretero no es hecho por el estado, sacrificamos la montaña en cambio para que nos dieran [la empresa maderera] el camino. Este es un camino maderero, sacaban la producción por aquí” (Entrevista morador Wimbí 1, 2018).

Así, en un contexto de abandono por parte del Estado y de necesidades apremiantes del territorio en materia de dotación de infraestructura y servicios, las empresas pudieron acordar su entrada y asentamiento en la comunidad. “Sacrificar la montaña” fue la única opción que les restó a los comuneros.

Vemos así que a lo largo de su historia, el territorio de Wimbí ha ido cambiando, haciéndose más pequeño. **La misma redefinición de las fronteras comunitarias a lo largo del tiempo es también producto de estos procesos de negociación, intervención, conflicto y abandono.**

La penetración de la palma ya es un hecho y amenaza con expandirse. Por otro lado, la comunidad está afectada por la extracción ilegal de madera cuyo principal protagonista es el mismo traficante de tierras que permitió la entrada de la palmicultora. La entrada de Energy&Palma y las actividades del traficante de tierras forman parte de un nuevo ciclo de despojo, más violento que en el pasado y con más complicidad por parte de algunas autoridades. Si finalmente éstas no ejercen justicia y garantizan los derechos de los habitantes de Wimbí, los comuneros tienen muchas posibilidades de salir una vez más perdiendo.

Este artículo está basado en el estudio “Peritaje cartográfico y social en relación a los conflictos de tierras de la comunidad Wimbí, San Lorenzo”. Para ver la información completa, los mapas realizados y las referencias completas, puede acceder al reporte en este link: <https://bit.ly/2HglxkK>

Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador,
www.geografiacriticaecuador.org, @GeoCriticaEc
 Quito, junio del 2018

- (1) Ver, Potter, L., La industria del aceite de palma en Ecuador: ¿un buen negocio para los pequeños agricultores? M.Eutopía, Num. 2, 2011 y Lasso, 2018, <https://lalineadefuego.info/2018/07/10/la-palma-aceitera-en-el-ecuador-un-cultivo-social-y-sustentable-por-geovanna-lasso/>
- (2) Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, ESPAC, 2016.
- (3) PLAN V., 2017
- (4) El Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador (CGCE) ha acompañado por varios años diversos conflictos territoriales que afectan los derechos fundamentales de comunidades, barrios y pueblos indígenas en a lo largo del país. La contribución del CGCE se centra fundamentalmente en poder ofrecer una mirada geográfica sobre las disputas que se dan en el espacio de vida de estos actores.
- (5) El Telégrafo, 2018, <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/grupopalmicultor-certificacion-granresponsabilidadsocial>
- (6) La historia de este juicio y de Miguel Egas es larga. Este señor fue uno de los demandantes contra la mancomunidad Río Santiago Cayapas (CRSC), a la cual la comunidad de Wimbí pertenece. Tras un proceso prolongado, en el cual al final los demandantes ganaron el pleito interpuesto a los muertos (fundadores originarios de la CRSC), el MAGAP efectuó una rezonificación de los linderos comunales que afectó a Wimbí. A partir de entonces, Miguel Egas ha ido fragmentando partes de este territorio para vender o extraer rentas sin el permiso de la comunidad. Adicionalmente, Miguel Egas está vinculado al grupo Peña Durini, asociado a la extracción de madera del territorio de la CRSC desde hace décadas.

WWF en el Parque Nacional Salonga de la República Democrática del Congo: tortura, asesinato y violación en grupo



Cartel en la entrada del Parque Nacional Salonga. Foto: Parque Nacional Salonga

Una investigación realizada por la organización *Rainforest Foundation UK* reveló que las comunidades que viven en torno al Parque Nacional de Salonga, en la República Democrática del Congo, han sufrido torturas, asesinatos y violaciones en grupo a manos de guardaparques financiados por WWF y varios otros donantes internacionales.

La investigación registra graves incidentes, entre ellos **dos casos de violaciones en grupo, dos asesinatos extrajudiciales y múltiples informes de torturas y otras formas de maltrato** cometidas por guardias del parque.

La organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) comenzó a trabajar en 2004 en el Parque Nacional de Salonga, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde 2015, **WWF ha sido responsable de la administración del parque.**

Aproximadamente 700 comunidades viven alrededor del parque, lo que incluye un estimado de 130.000 personas que viven en un “corredor” entre las dos mitades separadas del parque. Cuando se creó el parque en 1970, muchas de estas comunidades fueron desalojadas de allí y se les prohibió acceder a sus bosques ancestrales, de los cuales dependen para su supervivencia. **Estas comunidades están en situación de desnutrición generalizada, que atribuyen mayormente a las restricciones vinculadas a la conservación y que afectan sus actividades tradicionales de caza y pesca.**

Las medidas conservacionistas se han militarizado cada vez más en los últimos años. Las iniciativas contra la caza furtiva están a cargo de la autoridad congoleña de áreas protegidas (ICCN - *Institut Congolais pour la Conservation de la Nature*), a veces en colaboración con el ejército congoleño, además de los aproximadamente 300 ecoguardias que trabajan en el Parque Nacional Salonga.

“Es común que las mujeres que se aventuran en el parque sean violadas, y los hombres deben enfrentarse a casos de extorsión y tortura”, declaró un aldeano que vive en los límites del parque al equipo de investigación.

El WWF y el Banco Alemán de Desarrollo

En mayo y octubre de 2018, *Rainforest Foundation UK* informó a WWF y al KfW - **el Banco Alemán de Desarrollo, uno de los financiadores del Parque Nacional de Salonga** - sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos. En enero de 2019, WWF accedió a encomendar una investigación sobre el caso de abusos en el Parque Nacional de Salonga.

En febrero de 2019, la investigación confirmó el **asesinato de tres hombres, la violación de seis mujeres y la tortura de tres hombres por ecoguardias entre 2002 y 2016**. Sin embargo, aunque no se había establecido que el informe fuera confidencial, WWF comunicó a *Rainforest Foundation UK* que la investigación no estará disponible excepto en condiciones de estricta confidencialidad.

Simon Counsell, Director Ejecutivo de *Rainforest Foundation UK*, dijo: “Aunque estos informes son impactantes, tememos que el alcance real de las atrocidades pueda ser mucho mayor. En solo dos zonas cercanas a Salonga, las entrevistas realizadas a más de 230 personas locales revelaron que una cuarta parte de ellas denunció ser víctima de algún tipo de abuso. WWF debe permitir el acceso a los informes de su última investigación, reconocer públicamente lo que ha sucedido en Salonga y comprometerse públicamente a ayudar a las víctimas y garantizar que esas violaciones y daños a las comunidades locales no vuelvan a ocurrir”.

Al mismo tiempo, los periodistas de BuzzFeed News, que informaron sobre abusos generalizados en torno a Parques Nacionales apoyados por WWF en África y Asia, presentaron una causa legal para que KfW publicara documentos sobre la correspondencia relacionada con la financiación del Parque Nacional Salonga por parte del banco de desarrollo. El interés de BuzzFeed News es saber cuándo se enteraron KfW y el gobierno alemán de las graves violaciones de los derechos humanos y qué tratamiento les dieron. Hasta el momento, KfW ha destinado 5,4 millones de euros para la administración del Parque Nacional de Salonga.

“Es un tema de control”

En 2015, un empleado de WWF fue nombrado funcionario principal del parque, a cargo de cientos de ecoguardias. Después de dejar el trabajo, en una entrevista con la revista Nomad, declaró acerca de las comunidades que viven en el Parque Nacional de Salonga: “Pasé mis primeros cinco días en una canoa visitando varios sectores del parque. Cuanto más te adentras, más aislado y subdesarrollado es todo. Hay una presencia policial de mano dura. Fui a un pueblo muy aislado, donde me recibió un contingente de policías con equipo antidisturbios, con lanzacohetes. Fue muy intimidante. Es un tema de control. Siempre hubo historias de extorsión, robo, violación y palizas. Ellos se atribuían ser la ley, al igual que el ejército congoleño asignado al parque para controlar la caza furtiva. Hicieron un buen trabajo reduciendo la caza furtiva, pero de una manera bastante dura”. (1)

Lamentablemente, estos abusos en el Parque Nacional de Salonga son tan solo los últimos sucesos en ser documentados por Rainforest Foundation UK y Buzzfeed News. **Esto definitivamente es solo la superficie de un problema más amplio sobre violaciones de los derechos humanos e intervenciones coloniales en los bosques tropicales. Muy a menudo, las organizaciones conservacionistas están en el centro de estos graves abusos.**

(1) NOMAD, *Accidents happen in Congo*, agosto de 2017, <https://nomadmagazine.co/accidents-happen-congo/>

Este artículo se basó en los siguientes materiales:

Rainforest Foundation UK, Widespread Human Rights Abuses in Africa's largest Forest Park, marzo de 2019, <https://www.rainforestfoundationuk.org/widespread-human-rights-abuses-in-africas-largest-forest-park>

Rainforest Foundation UK, RFUK calls on WWF to immediately release details of investigation onto human rights abuses, abril de 2019, <https://www.rainforestfoundationuk.org/rfuk-calls-on-wwf-to-immediately-release-details-of-investigation-into-human-rights-abuses>

Buzzfeed News, Part I: WWF's Secret War; Part II: Internal reports shows WWF was warned years ago of “frightening” abuses; and Part III: WWF says Indigenous People want this park but an internal report reveals fears of ranger “repression”, marzo de 2019, <https://www.buzzfeednews.com/article/tomwarren/wwf-world-wide-fund-nature-parks-torture-death>

REDD-Monitor, “Torture, murder, rape”: WWF must release its report about abuses carried out by eco-guards in Salonga National Park, <https://redd-monitor.org/2019/04/02/torture-murder-rape-wwf-must-release-its-report-about-abuses-carried-out-by-eco-guards-in-salonga-national-park/>

ALERTAS DE ACCIÓN

Organizaciones finlandesas y uruguayas contra nueva fábrica de celulosa de la empresa UPM

La empresa finlandesa UPM planea instalar en Uruguay su segunda planta de celulosa, una de las mayores del mundo para producir más de 2 millones de toneladas por año. El proyecto exige un nuevo trazado del ferrocarril y una terminal portuaria para esa empresa, además de la ampliación de las líneas de distribución eléctrica de alto voltaje y varias plantas procesadoras en una zona franca. Una declaración por parte de organizaciones finlandesas y uruguayas convocan a desistir de este proyecto que conllevaría serios impactos. Lea la declaración (en español) aquí: <https://bit.ly/2vWkpfl>

Sarawak: ¡Salvemos la selva tropical de Mulu de las plantaciones de palma aceitera!

Una superficie de 4.400 hectáreas de la selva tropical de Mulu está siendo convertida actualmente en monocultivos de palma aceitera; se trata de una zona directamente adyacente a un Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Parque Nacional Mulu. Las comunidades indígenas Berawan y Penan, que se ven afectadas por las plantaciones, no fueron consultadas y se oponen al proyecto que destruirá sus bosques y sus medios de vida. Bruno Manser Fonds (BMF) pide una moratoria a las nuevas plantaciones de palma aceitera y el cese inmediato de la tala en la región del Parque Nacional Mulu. Los invitamos a firmar la petición ¡ahora! <https://www.savemulu.org/petition/>

RECOMENDADOS

Amazonia Brasileña. La pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra

Al ser la mayor selva tropical del mundo, el área más rica en minerales y la principal reserva biogenética del planeta, la Amazonía está entre los territorios más deseados por el capital global. A medida que el ataque contra la Amazonia Brasileña se expande bajo el gobierno de derecha de Jair Bolsonaro, el Instituto Tricontinental de Investigación Social analiza el avance del capital en la región, proporcionando una visión del ámbito internacional y nacional de los proyectos de minería y agronegocio, conflictos agrarios y la devastación de la biodiversidad, así como los desafíos que enfrentan los pueblos. Lea el informe (en portugués) aquí: <https://bit.ly/2O3KoKv>

Plantando Conflictos: monocultivos y despojo en la Amazonía peruana

Un corto documental de Oxfam Perú muestra la grave problemática ambiental y social que viene acarreado la expansión de plantaciones de monocultivos en la Amazonía peruana. Principalmente con el cultivo de la palma aceitera, miles de hectáreas han sido deforestadas, afectando además de bosques y quebradas, a varias comunidades nativas. De la mano de una aparente colusión entre agencias gubernamentales y las empresas involucradas, la expansión de la palma se posiciona como una amenaza latente en la Amazonía. Vea el video (en español) aquí: <https://www.youtube.com/watch?v=40nC60nQxBw>

Voces de mujeres frente al extractivismo

El último boletín mensual de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de derechos sociales y ambientales reúne diversos artículos de la región que ponen en evidencia la violencia que ejerce el modelo extractivista y el cambio climático sobre las mujeres. Pueden leer sus boletines (en español) en el siguiente enlace:

<https://www.redlatinoamericanademujeres.org/recursos/boletines>

Papua: cooptación de tradiciones indígenas para monocultivos de palma aceitera

Los indígenas papúes sufren la destrucción de su bosque para su reemplazo por plantaciones de monocultivo. Una entrevista del portal de noticias Mongabay a la antropóloga Sophie Chao evidenció las complejas tensiones entre las comunidades y el monocultivo que se les impone. La cooptación y manipulación de sus ritos tradicionales son herramientas utilizadas comúnmente por los acaparadores de tierras.

Pueden leer la entrevista en inglés en: <https://news.mongabay.com/2019/03/how-land-grabbers-co-opt-indigenous-ritual-traditions-in-papua-qa-with-anthropologist-sophie-chao/> y también vea el último lanzamiento del Proyecto Gecko y Mongabay que revela los turbios acuerdos para uno de los mayores proyectos de expansión de las plantaciones de palma aceitera en Indonesia: <https://news.mongabay.com/2018/11/the-secret-deal-to-destroy-paradise>

Tratados de Libre Comercio: instrumentos que sojuzgan los derechos

Un cuaderno de trabajo realizado por la Alianza Biodiversidad busca repensar los efectos de los tratados de libre comercio, así como señalar sus nocivos efectos, ya que éstos son marcos “jurídicos” poderosos, paralelos a las legislaciones nacionales, que le otorgan un margen de maniobra a las corporaciones y cierran las posibilidades de que la gente acceda a la justicia. Las luchas sin embargo se mantienen vivas. Lea la publicación (en español) en: <http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Tratados-de-Libre-Comercio-Instrumentos-de-desvio-de-poder-que-sojuzgan-el-Derecho>

Todos los artículos del Boletín pueden ser reproducidos y difundidos utilizando la siguiente fuente: **Boletín 243 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM): “Deforestación encubierta: Nuevas tendencias y resistencias”** (<https://wrm.org.uy/es/>)

Suscríbete al Boletín del WRM: <http://eepurl.com/8mVnL>

El Boletín busca apoyar y contribuir con las luchas de los pueblos en la defensa de sus territorios y bosques. La suscripción es gratuita.

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

Editor en jefe: Winfridus Overbeek

Redactora responsable: Joanna Cabello

Apoyo editorial: Elizabeth Díaz, Lucía Guadagno, Jutta Kill, Carolina Motoki y Teresa Pérez

Secretariado internacional del WRM

Avenida General María Paz 1615 oficina 3.

CP 11400, Montevideo, Uruguay

Teléfono y fax: 598 2605 6943

wrm@wrm.org.uy - www.wrm.org.uy/es/